

Los órdenes de justificación como marco analítico para el estudio de las prácticas económicas alternativas

Orders of Worth as an Analytical Framework for Understanding Alternative Economic Practices

José Luis Sánchez-Hernández y Lourdes Moro-Gutiérrez

Palabras clave

- Capitalismo
- Comunidad
- Órdenes de justificación
- Prácticas económicas alternativas
- Sostenibilidad

Resumen

Este artículo emplea la teoría de los órdenes de justificación para estudiar las prácticas económicas alternativas que cuestionan el capitalismo. Los datos proceden de un cuestionario aplicado a participantes en 55 experiencias de seis ciudades españolas, y del análisis de once casos en Salamanca mediante entrevistas semiestructuradas, observación directa y seguimiento de sus espacios virtuales. Estas iniciativas alternativas construyen comunidades igualitarias, autogestionadas, autónomas y respetuosas con la naturaleza. Sin embargo, para garantizar su funcionamiento interno y satisfacer las exigencias del entorno normativo, deben introducir métodos industriales y comerciales de índole empresarial que son legitimados a través de compromisos con los argumentos domésticos y ecológicos.

Key words

- Capitalism
- Community
- Orders of worth
- Alternative economic practices
- Sustainability

Abstract

This article draws upon the theory of orders of worth to study those alternative economic practices that bring into question capitalism. Data from a survey administered to people engaged in 55 alternative experiences located in six Spanish towns are discussed, along with an in-depth analysis of eleven cases from the city of Salamanca, where semi-structured interviews, field observation and the regular monitoring of virtual spaces were used. These alternative initiatives build egalitarian, self-managed and autonomous communities, strongly focused on a respect for nature. However, they are compelled to incorporate market and business practices in order to ensure their internal operation and satisfy the demands from the legal environment. These corporate-like procedures are thus legitimised through compromises with domestic and ecological arguments.

Cómo citar

Sánchez-Hernández, José Luis y Moro-Gutiérrez, Lourdes (2019). «Los órdenes de justificación como marco analítico para el estudio de las prácticas económicas alternativas». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 167: 107-124. (<http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.167.107>)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

José Luis Sánchez-Hernández: Universidad de Salamanca | jlsh@usal.es

Lourdes Moro-Gutiérrez: Universidad de Salamanca | moro@usal.es

INTRODUCCIÓN¹

Durante la última década de crisis económica y social se han extendido en los países avanzados determinadas iniciativas económicas, etiquetadas como *prácticas económicas alternativas* (Conill *et al.*, 2012), que cuestionan el modelo capitalista convencional basado en la propiedad privada de los medios productivos, en la empresa como fórmula organizativa, en el empleo asalariado como fuente de rentas, en la competencia en los mercados como espacio de interacción y en el beneficio individual como objetivo del proceso económico.

El Community Exchange System [en línea], principal plataforma electrónica global para la gestión de monedas sociales y bancos de tiempo, registra 201 iniciativas del primer tipo y 43 del segundo en España, equivalentes al 28,3% y el 22,9% del total mundial. El Mapa de Innovación Social de Cataluña [en línea] cartografía 550 experiencias (bancos de tiempo, monedas sociales, grupos de consumo, huertos urbanos, espacios autogestionados, cooperativas energéticas), mientras el Ayuntamiento de Barcelona, cuya Área de Trabajo, Economía y Planificación Estratégica asume el apoyo a estas iniciativas, ha identificado 250 ejemplos (Fernández y Miró, 2016). El Plan Estratégico de la Economía Social y Solidaria de la Ciudad de Madrid [en línea] menciona 90 casos dentro de un extenso panorama de cooperativas y organizaciones del Tercer Sector. El proyecto municipal MARES DE MADRID [en línea], cofinanciado por la Unión Europea,

persigue la transformación urbana, social y ambiental a través de formatos alternativos de movilidad, alimentación, reciclaje, energía y cuidados.

La literatura sobre estas experiencias económicas presenta dos rasgos característicos, uno de carácter teórico y otro de índole metodológica. Primero, estas alternativas se han estudiado desde posiciones críticas con el capitalismo. Los textos apoyados en la teoría del valor-trabajo (Jonas, 2010; Lee, 2010; Mason, 2016; Banet-Weiser y Castells, 2017) contraponen, como fórmulas de distribución del valor, las alternativas colaborativas y autogestionadas con la relación salarial capitalista. La literatura sobre bienes comunales (de Angelis, 2010; Noterman, 2016) reivindica la gestión colectiva de recursos y equipamientos esenciales (agua, suelo, alimentos, vivienda, espacio público) para combatir la privatización neoliberal. Una tercera corriente subraya la contribución de estas prácticas, especialmente las ligadas a la alimentación (Alonso *et al.*, 2014; Barbeta, 2014), a la construcción de un modelo socioeconómico sostenible. Las teorías del decrecimiento (Latouche, 2013; Kallis, 2017) y de los nichos de transición (López *et al.*, 2014; Nicolosi y Feola, 2016) denuncian la depredación de la naturaleza a manos del capitalismo y ven en estas prácticas una prueba de la viabilidad de soluciones económicas menos intensivas en carbono.

Segundo, predomina el estudio de caso local que analiza una iniciativa concreta, o varios ejemplos del mismo tipo ubicados en una ciudad: mercados de productores en Madrid (Méndez y Monteserín, 2017); grupos de consumo agroecológico en Madrid (Michelini *et al.*, 2017), Barcelona (Barbata, 2014) o Valencia (Moragues, 2017); espacios autogestionados en Barcelona (Yates, 2015) o huertos urbanos en Alicante (Espinosa *et al.*, 2017). Menos numerosos son los intentos por caracterizar una práctica para toda España, como los grupos de consumo

¹ Este trabajo se encuadra en el proyecto de investigación «Espacios y prácticas económicas alternativas para la construcción de la resiliencia en las ciudades españolas» (2016-2018), Programa Estatal de I+D+I-RETOS (MINECO-FEDER, referencia CSO2015-65452-R). Este proyecto participa en la Red de Excelencia «RETURBAN-Retos para las ciudades del siglo XXI: una agenda de investigación para la construcción de espacios urbanos sostenibles e innovadores» (2017-2019). Plan Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, referencia CSO2016-81718-REDT.

(Alonso *et al.*, 2014), las monedas sociales (Hughes, 2015) o los bancos de tiempo (Valor y Papaoikonomou, 2016). Los panoramas sobre la economía alternativa en una ciudad se limitan a Barcelona (Conill *et al.*, 2012; Fernández y Miró, 2016; Suriñach, 2017), Valencia (Salom *et al.*, 2017) y Valladolid (Pascual *et al.*, 2018). Respecto a las técnicas de investigación, predomina el recurso a las entrevistas semiestructuradas, seguidas de lejos por los grupos de discusión y los períodos de observación participante. El uso de cuestionarios es minoritario y se aplican a participantes en una experiencia concreta, salvo en el caso de Conill *et al.* (2012).

Este artículo propone un enfoque teórico y empírico diferente. En vez de analizar la *alternatividad* desde posiciones discrepantes con el capitalismo, se asume con Polanyi (1944) que todo proceso económico es de naturaleza social y está sujeto al mismo conjunto de rationalidades que las demás actividades sociales. La teoría de los órdenes o *regímenes de justificación* desarrollada por Boltanski y Thévenot en *De la Justification* (1991)², también conocida como *teoría de las convenciones*, constata la pluralidad de argumentos que utilizamos para evaluar las conductas de personas y organizaciones y juzgar la congruencia de las situaciones donde unas u otras interactúan. No participa de una valoración negativa del capitalismo y, de hecho, se ha empleado para demostrar que la empresa capitalista busca la rentabilidad a través de la eficiencia técnica y la competencia en los mercados, pero su práctica cotidiana incorpora también acciones que fortalecen la confianza entre sus empleados, la reputación de su marca, su compromiso con la comunidad o su aportación a la sostenibilidad.

La aplicación de un marco teórico común al estudio de mecanismos de organización económica que se reclaman antagónicos (la empresa capitalista y sus alternativas) permitirá identificar no solamente los puntos de divergencia, enfoque dominante hasta ahora, sino también los de confluencia, todavía poco considerados (Argüelles *et al.*, 2017). A través de la teoría de los órdenes de justificación, este artículo caracteriza la combinación específica de rationalidades que distingue a las prácticas económicas alternativas (PEA) de las empresas capitalistas. Ambas apelan a una batería de argumentos —los órdenes de justificación— potencialmente útiles para todo tipo de actores y situaciones. La *alternatividad* de las PEA radicaría, así, en la construcción de una jerarquía propia de órdenes de justificación, distinta a la que aplica el modelo capitalista, pero elaborada a partir del mismo elenco de argumentos y, por tanto, más compleja que las referencias rituales a la cooperación, la participación y la sostenibilidad (Barbata, 2014; Moragues, 2017).

En el plano empírico, esta investigación trasciende los enfoques local (todas las PEA de una ciudad) y sectorial (una misma PEA en varias ciudades). No pone el acento sobre dinámicas locales ni sobre variantes específicas (alimentación, intercambio...), sino sobre los argumentos y soluciones que las PEA en conjunto oponen a los esquemas organizativos capitalistas. Por tanto, se analizan seis modalidades de PEA en seis ciudades españolas, hasta sumar 55 casos a los que se han aplicado técnicas empleadas hasta ahora por separado.

El primer apartado presenta la teoría de los órdenes de justificación. El segundo propone una definición de las PEA. El tercero expone la metodología y argumenta que estas prácticas conceden prioridad a los órdenes de justificación doméstico, ecológico y cívico, sin ignorar por completo los órdenes industrial, comercial, público y de la inspiración que guían la praxis capitalis-

² No existe traducción al español de este libro, pero sí al inglés, aunque bastante tardía: *On Justification. Economies of Worth*. Princeton: Princeton University Press, 2006.

ta. Las conclusiones recogen los aspectos fundamentales y proponen nuevas líneas de trabajo.

LA TEORÍA DE LOS ÓRDENES O REGÍMENES DE JUSTIFICACIÓN

La teoría de los órdenes de justificación sostiene que las personas recurrimos a diversos tipos de argumentos para juzgar la pertinencia de la conducta propia, de la conducta ajena y de las situaciones que componen la vida cotidiana. Nuestra necesidad de dotar de sentido a las acciones que conforman las relaciones interpersonales habría dado lugar, según esta sociología pragmática, a la construcción interactiva de unos marcos de referencia denominados órdenes o regímenes de justificación. Se trata de subconjuntos coherentes de valores, normas, convenciones, actos y objetos mediante los cuales los individuos construyen, en un proceso iterativo, expectativas fiables sobre lo que se espera de ellos y lo que pueden esperar de los demás en las situaciones en que participan a diario. Proporcionan criterios para evaluar el mérito de las personas y para calificar las situaciones y la calidad de los objetos que las constituyen. Operan como reductores de la incertidumbre, legitiman el comportamiento propio y sustentan el juicio que merecen los comportamientos ajenos.

El texto fundacional distingue seis órdenes de justificación: de la inspiración, industrial, del mercado, doméstico, de la opinión (o la fama, o público) y cívico; Lafaye y Thévenot (1993) añadieron después el orden ecológico. En el primero de ellos, el sujeto no invoca un orden terrenal (es decir, social) para justificar sus acciones, sino que las legitima como inspiradas por fuerzas sobrenaturales, únicas ante las cuales se siente responsable. En el orden industrial, dominado por los objetos técnicos y los métodos científicos, las personas son juzgadas por su cualificación profesional y sus actos deben

contribuir al funcionamiento eficaz de unos sistemas de producción de los que se espera un rendimiento estable. En el régimen del mercado, la acumulación de riquezas es el patrón de referencia y la competencia por conseguirlas se convierte en conducta plenamente aceptable para satisfacer el afán individual de lucro. En el orden doméstico, se exige respeto a los vínculos interpersonales en un contexto de proximidad física donde el individuo no puede ser concebido al margen de su pertenencia a una red de personas depositarias de la confianza del grupo. Al contrario, en el régimen público son acciones legítimas las que otorgan reconocimiento al individuo fuera de su círculo íntimo, en el terreno de la fama y la aprobación por parte de un elevado número de desconocidos. El orden de justificación cívica enjuicia las personas y las acciones según su contribución al bien común y al desarrollo de un espacio público (material o institucional) que garantice la libre participación ciudadana. Por último, se apela al orden ecológico cuando se censura el impacto de las acciones individuales o colectivas sobre la naturaleza, o se ensalza su aportación a la sostenibilidad ambiental.

La empresa mercantil sirve a Boltanski y Thévenot para demostrar que la vida de las organizaciones no está sujeta a un único orden de justificación. Toda compañía necesita conciliar los imperativos centrales de cada uno de ellos: debe ser inspirada (o innovadora, en términos actuales), eficaz, rentable, cohesionada, prestigiosa, comprometida y sostenible. La gestión de exigencias tan plurales, cuando no opuestas, es fuente de conflictos internos y externos que se resuelven mediante acuerdos o compromisos inestables entre órdenes de justificación divergentes. *De la Justification* dedica muchas páginas a enumerar las críticas que desde cada orden se dirigen a los demás y los acuerdos que pueden alcanzarse mediante la articulación negociada de argumentos procedentes de diversos órdenes.

Por motivos de espacio no se puede dar aquí cuenta íntegra de esta discusión, pero sí de su trascendencia para el estudio de la economía en su marco social. Los circuitos de valor (integrados por productores, distribuidores, consumidores y reguladores) operan como marcos cognitivos de interacción social donde se negocian los atributos que deben incorporar los productos. La evaluación de su calidad ya no depende solamente de cualidades industriales (duración, fiabilidad) y comerciales (precio, utilidad). Intervienen, en proporción creciente, criterios domésticos (tradición, origen local), públicos (marca, logotipo), cívicos (respeto a la normativa, compromiso con la comunidad) y ecológicos (reciclaje, bienestar animal). Por tanto, las empresas transmiten al consumidor un discurso que incorpora todos estos componentes, aunque cada una lo adecúa a las particularidades de su producto y de su nicho de mercado.

Esta teoría ha amparado una nutrida línea de investigación sobre la gestión de este pluralismo. La corporación debe alcanzar compromisos que conjuguen elementos de los distintos órdenes de justificación; pero también debe comunicar tales compromisos a la sociedad para cumplir con la regulación y con las expectativas de unos consumidores crecientemente segmentados y exigentes (Alonso, 2009). Cloutier y Langley (2013) revisan investigaciones que analizan estos compromisos en compañías dedicadas a la generación de energía nuclear, el cuidado de personas mayores, la elaboración de quesos, la asesoría legal o la evaluación de servicios turísticos. Los cambios organizativos de estas empresas para adaptar su producto y su imagen a las tendencias del mercado se interpretan como un proceso de adopción de argumentos domésticos y ecológicos. Jagd (2011) revisa otras contribuciones que aplican estas ideas a organizaciones públicas (hospitales, universidades, escuelas) y encuentran que su estructura interna no escapa a las exigencias de los órdenes industrial,

comercial y público, aunque su misión está imbuida de propósitos cívicos.

En cuanto a los circuitos de valor como espacio social de negociación de la calidad de los productos, la teoría de los órdenes de justificación se ha utilizado para interpretar las transformaciones del sistema agroalimentario de los países desarrollados (Ponte, 2016, para una revisión), puesto que la alimentación es una de las necesidades humanas más modeladas por factores naturales y culturales. Esta literatura arranca de la crítica a los alimentos elaborados por las corporaciones globales y distribuidos por las cadenas de supermercados. Este régimen alimentario industrial, del mercado y de la fama sería responsable del deterioro de la artesanía tradicional, del comercio de proximidad, de la salud humana y del medio natural. La respuesta consiste en una justificación de la calidad alimentaria elaborada con argumentos domésticos, cívicos y ecológicos, encarnada en *redes alimentarias alternativas* (Whatmore y Thorne, 1997), fundamentadas sobre la proximidad geográfica entre productores y consumidores, la distribución equitativa del valor y la sostenibilidad del circuito.

Este artículo avanza en esta línea de investigación al aplicar la teoría a mecanismos de organización económica que no tienen el grado de formalización de las corporaciones ni la complejidad de las cadenas de valor, sino que comparten los objetivos domésticos, cívicos y ecológicos de las redes alimentarias alternativas.

PROUESTA DE DEFINICIÓN DE LAS PRÁCTICAS ECONÓMICAS ALTERNATIVAS

La bibliografía revisada enumera hasta setenta modalidades *alternativas* de organización económica. Sin embargo, no ofrece una definición que facilite su identificación empírica, tarea que se aborda en este apartado

partiendo de los tres términos del concepto *prácticas económicas alternativas*.

El término *prácticas* designa formas organizativas muy poco institucionalizadas, carentes casi siempre de personalidad jurídica. A lo sumo, sus miembros constituyen asociaciones para satisfacer exigencias básicas como el alquiler de un local de encuentro o el contrato del suministro eléctrico. Su órgano rector es la asamblea, abierta a todos los integrantes y donde las decisiones se toman por consenso, no por mayoría.

Estas prácticas son *económicas* porque producen, distribuyen o consumen bienes o servicios, o bien financian estas funciones. Como el capitalismo, pretenden satisfacer necesidades humanas. No obstante, las PEA proponen soluciones cooperativas (no competitivas) para cubrir necesidades expresadas a través del mercado, pero también otras que permanecen recluidas en el ámbito doméstico y, desde la óptica capitalista, no forman parte de la economía porque se satisfacen sin mediación de transacciones mercantiles. La economía alternativa concede prioridad al valor de uso (reutilización, reparación, trueque, obsequio) frente al valor de cambio (precio, crédito) y aspira a servir a las personas en toda su integridad, no a convertirse en un fin que deba ser alimentado mediante el crecimiento permanente de la producción.

La noción de *alternatividad* es relacional: se es alternativo respecto de algo que se tiene por convencional o mayoritario, en este caso, el capitalismo, particularmente su actual versión neoliberal, global y financiarizada. Cabe identificar tres actitudes críticas hacia el capitalismo: oposición (anticapitalismo), transformación (neocapitalismo) y superación (postcapitalismo).

El anticapitalismo practica una oposición activa porque se nutre de las críticas marxista, anarquista, feminista y ecologista, que conciben al capitalismo como un sistema explotador, opresor, excluyente y depreda-

dor. Las tendencias transformadoras, sin cuestionar la propiedad privada o la asignación de recursos a través del mercado, proponen esquemas organizativos capaces de corregir los efectos más perniciosos del capitalismo sobre la sociedad o la naturaleza. El postcapitalismo cuestiona el *capitalocentrismo*, cosmovisión que dominaría nuestra forma de pensar la economía y según la cual el capitalismo es el único sistema económico viable en el mundo contemporáneo. Esta corriente recuerda que, en la vida diaria, satisfacemos muchas necesidades gracias a prácticas no competitivas ni mercantiles que deben difundirse para detener la penetración social de las relaciones capitalistas.

A esta discusión debe añadirse una dimensión geográfica. El concepto de *variedades del capitalismo* (angloamericano, asiático, continental europeo; Hall y Soskice, eds., 2001) recuerda que no se trata de un sistema monolítico e independiente de las especificidades de las sociedades y culturas donde arraiga. Esta distinción no puede eludirse en una definición de la alternatividad: si el capitalismo adopta configuraciones geográficamente diferenciadas, sus alternativas pueden diferir según el contexto institucional. Es el caso de las empresas cooperativas, asociadas en los Estados Unidos a la izquierda radical (Noterman, 2016) y carentes de esa connotación en la Europa mediterránea, por ejemplo en el sector agrario.

Las prácticas económicas alternativas pueden definirse, entonces, como *mecanismos de coordinación económica que se rigen por principios de autonomía, reciprocidad y democracia directa, promueven valores no competitivos (sostenibilidad, cooperación, equidad) y pretenden eliminar, transformar o superar la variedad de capitalismo hegemónico en su marco geográfico de actuación*. Caben dos modelos de organización espacial: operar en un ámbito local (barrio, ciudad) con espacios físicos de encuentro para los participantes, o bien formar redes regionales, nacionales o internaciona-

les sin necesidad de contacto presencial entre los integrantes.

Este trabajo se centra en el primero, dejando fuera experiencias como el comercio justo o la banca ética, por dos razones principales. Primera, la voluntad de construir comunidades democráticas y sostenibles se traduce en la formación de grupos pequeños que buscan la proximidad física para estimular la confianza y minimizar los desplazamientos (Conill *et al.*, 2012; Moragues, 2017; Suriñach, 2017). Segunda, su ideal de una economía con valores las convierte en objeto de estudio idóneo para una teoría de vocación holística, interesada por las situaciones materiales creadas en los espacios de encuentro donde se negocian, bajo condiciones débilmente formalizadas, los compromisos entre órdenes de justificación que exige el funcionamiento congruente de cada iniciativa.

LA PLURALIDAD DE ÓRDENES DE JUSTIFICACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ECONÓMICAS ALTERNATIVAS

Metodología

Esta investigación se ha desarrollado en seis ciudades españolas según una metodología coordinada. Se confeccionó primero un inventario de las PEA de carácter co-presencial operativas en cada ciudad, abarcando las categorías propuestas por Conill *et al.* (2012), a partir del conocimiento de cada equipo local de investigación sobre su ciudad y del rastreo adicional en Internet. Se seleccionaron como objeto de estudio las seis modalidades más frecuentes y difundidas a fin de recoger, para cada una, datos de distintas localidades y reducir así el efecto del contexto local sobre los resultados globales.

Después se confeccionó un manual metodológico para cada tipo de PEA, compuesto por una definición de los criterios que debe cumplir cada caso individual, una ficha de toma de datos, un guion de entre-

vista semiestructurada y un cuestionario estandarizado: estas tres últimas herramientas constan de preguntas comunes a las seis clases de PEA y de otras específicas para cada una. El trabajo de campo consistió en entrevistas con las personas designadas al efecto por los participantes en cada PEA. Durante las entrevistas se cumplió la ficha de datos (fecha de fundación, número de implicados, actividades organizadas y su frecuencia...) y se solicitó la distribución del cuestionario a los participantes, con la opción de llenarlo en un impreso o a través de un formulario en línea.

Entre mayo y diciembre de 2017 se reca-
baron datos de 55 experiencias: cuatro ban-
cos del tiempo (BT), ocho centros sociales
autogestionados (CSA), veintiún grupos de
consumo agroecológico (GCA), trece huertos
urbanos (HU), siete mercados de producto-
res o de trueque (MPT) y dos iniciativas de
moneda social (MS). Están representadas
todas las fases del ciclo económico (produc-
ción, distribución, consumo y financiación),
más un espacio de ocio y encuentro (CSA).
Los casos se distribuyen entre Valladolid
(24), Salamanca (11), Zaragoza (6), León (5),
Alicante (5) y Oviedo (4).

Sobre un total de 4.202 personas impli-
cadas en estas PEA, se obtuvieron 389
cuestionarios, de modo que los resultados
son estadísticamente significativos para un
nivel de confianza del 95% y un margen de
error del 5% (tamaño mínimo de muestra
requerido de 349 respuestas). La muestra
está integrada por un 53% de mujeres, la
edad media se sitúa en 48,1 años y el 92,5%
posee nacionalidad española. Su nivel edu-
cativo (tabla 1) es elevado (61,9% con estu-
dios universitarios o postuniversitarios),
congruente con un alto grado de inserción
laboral (66,7% de ocupados) y la pertenencia
a hogares con un nivel de renta medio o
medio-alto: el 43,7% declara ingresar entre
20.000 y 40.000 euros anuales, siendo
26.730 euros el promedio español en 2016,
según el INE.

TABLA 1. Perfil de las personas participantes en 55 prácticas económicas alternativas en España

Estudios completados (n=378)	%	Actividad (n=378)	%	Renta anual del hogar (euros) (n=343)	%
Primario	14,0	Jubilado	15,9	< 10.000	15,5
Bachillerato	11,6	Estudiante	11,6	10.000-20.000	30,9
Formación profesional	12,4	Desempleado	5,8	20.000-40.000	43,7
Universitario (graduado o licenciado)	45,2	Empleado	66,7	40.000-60.000	7,6
Máster o doctorado	16,7			> 60.000	2,3

Fuente: Explotación de los datos del cuestionario.

Los resultados de estos cuestionarios ayudarán a situar en un contexto más amplio el contenido de las once entrevistas semiestructuradas grabadas en Salamanca a PEA de los seis tipos, previo consentimiento de los interlocutores. Su duración oscila entre 40 y 70 minutos y se transcribieron literalmente para codificar después los pasajes referidos a los siete órdenes de justificación con el software *N-Vivo*. Las restantes 44 entrevistas, también transcritas, no se utilizan por tres razones. Primera, porque dada la perspectiva transversal de este trabajo, el nivel de saturación se alcanza con estas once entrevistas, según se ha constatado tras la lectura de las demás transcripciones. Segunda, porque durante el trabajo de campo los autores tuvimos oportunidad de observar o participar en distintas actividades de estas once PEA, accediendo a una abundante información contextual de la que carecemos para los otros casos. Esta participación estuvo siempre sujeta a la autorización previa de las asambleas de las PEA cuando se trataba de actividades para sus integrantes, como los repartos de pedidos o las propias asambleas. Asistimos a las actividades abiertas (ferias, mercados, mesas redondas) como parte del público, recogiendo folletos informativos y tomando fotografías y notas de campo debidamente transcritas en un diario. Tercera, porque toda esta información se ha completado con la observación quincenal de los espacios virtuales de estas once

PEA, que alojan abundantes datos sobre su trayectoria, objetivos y actividades. El material recabado por métodos presenciales o virtuales ha sido fundamental para enriquecer el contenido de las once entrevistas y situar la acción alternativa en espacios físicos y sociales concretos, así como para constatar el significado de las situaciones materiales en la construcción de los compromisos entre órdenes de justificación, como subraya el marco teórico.

Resultados

Asumiendo cierto grado de simplificación, entendemos que los órdenes de justificación industrial y del mercado, complementados con el público y el de la inspiración-innovación, sustentan el funcionamiento de las empresas capitalistas contemporáneas. Ello no impide reconocer la difusión de las políticas de responsabilidad social corporativa, impregnadas de valores cívicos y ecológicos, y de técnicas de gestión de recursos humanos orientadas al fortalecimiento de los lazos interpersonales en las plantillas (orden doméstico) con vistas, eso sí, a aumentar su productividad y su compromiso con la firma (Valenzuela y Molina, 2013).

Las PEA se reclaman alternativas frente a este arquetipo. Los datos demuestran que también apelan a los siete órdenes de justificación. No en vano tienen un propósito económico y comparten el contexto social y

espacial con firmas capitalistas. La diferencia radica, pues, en la dispar combinación de órdenes de justificación dominante en cada modelo.

La justificación doméstica

El reducido tamaño medio de las PEA (76,4 miembros para los 55 casos, 37,7 en Salamanca) es fundamental para forjar una comunidad de iguales basada en la confianza interpersonal y la participación directa en la toma de decisiones, una reivindicación capital de los participantes (tabla 2, afirmación 11). La asamblea (entre mensual y semanal), a la que son convocados todos los integrantes para supervisar la marcha de la iniciativa, facilita el contacto regular y el ejercicio de una democracia fundamentada en el consenso. Es unánime el rechazo a la votación para resolver las discrepancias: se opta siempre por la deliberación para alcanzar la

unanimidad y evitar sentimientos de exclusión entre los asistentes.

Estas asambleas se celebran en la sede de la PEA. El espacio alternativo constituye parte integral de la comunidad y aparece decorado con motivos alusivos a su actividad. Varios interlocutores admiten que su pequeña superficie limita el crecimiento del colectivo o la mejora de su funcionamiento. Sin embargo, la adhesión de nuevos miembros no se cita como prioridad, hasta el punto de que los GCA establecen un número máximo de participantes, rebasado el cual se procede a fundar un nuevo grupo.

Este sentido de comunidad se refuerza con la celebración de actividades complementarias (comidas comunitarias, mercados de trueque, talleres formativos) o visitas a los productores de los GCA para desmercantilizar la relación y establecer lazos personales.

TABLA 2. *Actitudes de los participantes en las prácticas económicas alternativas*

Afirmaciones	Media de las puntuaciones
Para mí es importante...	
1 ayudar a otras personas y mostrarme generoso con ellas	4,0
2 tener éxito personal y que los demás reconozcan mis logros	2,2
3 ganar mucho dinero y tener muchas cosas	1,5
4 tener autonomía para desarrollar mis propias ideas	3,8
5 cumplir las normas establecidas en cada situación	2,8
6 cuidar mi salud y mi alimentación	4,0
En mi opinión...	
7 la organización de la economía debe basarse en las empresas privadas	1,7
8 la competencia entre las personas es buena porque estimula el esfuerzo y la innovación	2,3
9 se puede confiar en la mayoría de las personas, no solo en amigos y familiares	3,4
10 el crecimiento económico y la creación de empleo son más importantes que la protección del medio ambiente	1,7
11 es necesario desarrollar formas de democracia más participativa	4,4

Fuente: Explotación de los datos del cuestionario.

Nota: Respuestas a la pregunta «Señale con una "X" su grado de conformidad con las siguientes afirmaciones, mediante una puntuación de 1 a 5, donde 1 es "Nada de acuerdo" y 5 es "Totalmente de acuerdo"».

Ahora bien, la contribución de los miembros a la autogestión es objeto de debate interno. Los participantes sostienen que es importante ayudar a otras personas y que estas son merecedoras de confianza (tabla 2, afirmaciones 1 y 9). No obstante, los entrevistados admiten cierta división entre unos pocos participantes muy comprometidos y otros que asumen las tareas mínimas obligatorias, con la consiguiente dificultad para asegurar el funcionamiento del grupo.

La justificación cívica

El vínculo doméstico construido sobre la asamblea y la sede sustenta un espacio cívico o *ciudadanía alternativa* sujeta al cumplimiento de ciertas normas aprobadas por unanimidad. Las modalidades mayores y más estructuradas (BT, GCA, MS) disponen de reglamentos escritos, accesibles en sus webs, que definen a los integrantes como «socios» o «miembros», titulares de unos derechos y deberes en ese espacio colectivo. Propuestas antiautoritarias como los CSA rechazan esta forma de coerción, pero muestran en su web las normas de comportamiento o exhiben en la sede listas de conductas que juzgan inapropiadas. En este espacio cívico alternativo es posible desarrollar una existencia autónoma respecto de los

modelos socioeconómicos convencionales, aspiración altamente valorada entre los implicados (tabla 2, afirmaciones 4 y 5).

Los HU, MPT y CSA están funcionalmente ligados a su sede física (solar, plaza, local) y añaden al espacio participativo la voluntad de transformar las relaciones sociales en su entorno inmediato a través de su cometido principal (HU, MPT), o de las propuestas de contracultura que acogen los CSA, cuyos locales suelen cederse para encuentros de colectivos ecologistas, feministas o anticapitalistas. Los BT, interesados en la recuperación de las redes vecinales de ayuda mutua, quieren desmercantilizar las relaciones de proximidad con su sistema de intercambio de servicios entre iguales. Los GCA, finalmente, expresan su compromiso con el mantenimiento de la población rural adquiriendo alimentos a productores independientes de los grandes supermercados.

Las respuestas al cuestionario corroboran este propósito transformador. El motivo más citado para participar en la PEA es mejorar la sociedad, seguido de la crítica a la economía convencional (tabla 3, respuestas 4 y 5). Entre las ventajas personales que reporta dicha participación, la construcción de una alternativa económica ocupa el se-

TABLA 3. Motivos de participación en prácticas económicas alternativas

MOTIVOS (nº menciones)	Nº	%
1 Puedo acceder a bienes y servicios gratuitos o más baratos	124	11,75
2 Me permite participar en actividades diferentes	111	10,52
3 Me relaciono con gente diversa	151	14,31
4 Contribuyo a mejorar la sociedad	259	24,55
5 Cuestiono la economía convencional	224	21,23
6 Ayudo a transformar mi barrio	91	8,63
7 Me gusta dedicar mi tiempo a esta actividad	95	9,00
Total	1.055	100,00

Fuente: Explotación de los datos del cuestionario.

Nota: Respuestas a la pregunta «¿Por qué participa en esta actividad? Elija un máximo de TRES motivos».

TABLA 4. Valoración de las ventajas asociadas a la participación en prácticas económicas alternativas

Ventajas	Media de las puntuaciones
1 Ahorro dinero	2,6
2 Cubro mis necesidades materiales	2,8
3 Mejoro mi autoestima personal	3,1
4 Me siento más integrado/a en el barrio	2,8
5 Mejoro las condiciones de vida en mi entorno	3,9
6 Combato la exclusión social en mi entorno	3,1
7 Contribuyo a crear una alternativa al sistema económico dominante	4,1
8 Cuido el medio ambiente	4,2

Fuente: Explotación de los datos del cuestionario.

Nota: Respuestas a la pregunta «¿Qué importancia tienen para usted las siguientes ventajas de participar en esta actividad? Señale con una X la casilla correspondiente, mediante una puntuación de 1 a 5, donde 1 es “Nada importante” y 5 es “Muy importante”».

gundo lugar y la mejora de las condiciones locales de vida el tercero (tabla 4, respuestas 5 y 7). En segundo plano queda el interés por transformar el barrio donde se localiza la PEA. Estos resultados concuerdan con la definición de las PEA como instrumento para avanzar hacia una sociedad diferente.

Esta vertiente interna y externa de la justificación cívica alternativa no exime del cumplimiento de otras obligaciones cívicas impuestas por el Estado y el capitalismo, como el pago del alquiler y mantenimiento de los locales. Las iniciativas más complejas (BT, MS, MPT) han constituido asociaciones legalizadas que firman los correspondientes contratos. Otras PEA emplean locales cedidos por sindicatos o parroquias, y les compensan por los gastos con dinero en efectivo dextraído de su actividad; otra opción consiste en que un participante ostente la titularidad del contrato y abone las mensualidades con fondos generados por la PEA o aportados equitativamente por los implicados (CSA, HU). Cuando el espacio cívico alternativo topa con normas comunes a toda la ciudadanía, se hace preciso alcanzar compromisos que concilien la fidelidad al ideario

original con el cumplimiento de ciertas obligaciones ineludibles.

La justificación ecológica

La construcción de un modelo socioeconómico respetuoso con la naturaleza es un objetivo nuclear de las PEA: la protección del medio ambiente se considera más importante que el crecimiento económico y la creación de empleo (tabla 2, afirmación 10) y la principal ventaja asociada a participar en una PEA es la de cuidar el medio ambiente (4,2 puntos, tabla 4).

Los implicados en HU, GCA y MPT deben consumir alimentos de proximidad obtenidos por medios naturales que excluyan el sufrimiento animal y los tratamientos químicos: el cuidado de la salud mediante la alimentación recibe una valoración tan alta como la colaboración con los demás (4,0 puntos, tabla 2, afirmación 6). Cuestionan, sin embargo, los sellos ecológicos oficiales porque el coste de la certificación es demasiado gravoso para productores pequeños y comprueban el manejo agrológico de los productores en visitas periódicas. Los alimentos vendidos en los MPT suelen carecer también de estos certificados y reivindican su proce-

dencia local o artesana. Los HU funcionan como espacios de socialización y transmisión de saberes tradicionales entre personas mayores de origen rural y jóvenes urbanos deseosos de consumir hortalizas sin añadidos químicos. Estos argumentos combinan la justificación ecológica con la doméstica para contestar a las estrategias capitalistas que mercantilizan la crítica a los alimentos industrializados. Los CSA, por su parte, son espacios antiespecistas, acogen comedores veganos para recaudar fondos y programan talleres de reparación y reciclado de bicicletas, ropa o muebles.

Sin embargo, el ideal ecodoméstico de un abastecimiento integral de alimentos naturales y locales suministrados por pequeños agricultores también padece restricciones. Los GCA de Salamanca adquieren alimentos en provincias como Valencia, Murcia, Granada, Cáceres, Burgos o Palencia porque la oferta de proximidad es insuficiente y las condiciones naturales impiden la producción local de cítricos, arroz o pescado. Los CSA reconocen carecer de fondos para adquirir alimentos orgánicos y los reemplazan por frutas y verduras compradas en el comercio del barrio, compromiso que sustituye la justificación ecológica por la doméstica.

La justificación industrial

Las PEA procuran funcionar de manera eficiente. La periodicidad de sus asambleas establece una rutina de cumplimiento más o menos obligado. Los pedidos de los GCA se tramitan en un impresario normalizado y se recogen siempre el mismo día y hora en la sede. El proceso es supervisado por un grupo rotatorio de voluntarios que centraliza los pedidos y transmite el encargo a los productores. La MS distribuye un boletín electrónico mensual de ofertas de bienes o servicios para su pago en ecos. Los CSA publican en sus blogs el calendario semanal de apertura y actividades. Los HU siguen un diseño previo de distribución de los cultivos, periodicidad del riego y tratamiento de las plantas. Los

MPT reservan al comité organizador la disposición de los puestos de venta y la provisión de la infraestructura de funcionamiento.

De nuevo, las iniciativas de mayor dimensión requieren procedimientos estandarizados de gestión: BT y MS se apoyan en plataformas digitales que conectan a oferentes y demandantes, les permiten acordar los términos del intercambio, registran las transacciones efectuadas y calculan el saldo de cada usuario. El BT dispone de un sistema de cheques que los usuarios deben entregar en la secretaría, gestionada por una asociación que supervisa la calidad de los intercambios mediante una llamada telefónica al receptor.

Sin embargo, la reticencia de los participantes ante la deshumanización inherente a los métodos industriales frena su implantación: la determinación de un número máximo de miembros que garantice la confianza mutua es la salvaguarda más extendida. Las entrevistas refieren debates como la eventual sustitución de los nombres por números en las cestas de un GCA: aunque se reconocía que agilizaría la distribución de los pedidos, implicaba una pérdida de reconocimiento personal que no fue aceptada por la asamblea.

La justificación pública

Las PEA no pretenden aislarse del resto de la sociedad, pese a la primacía de los argumentos domésticos. Su afán de transformación social y ambiental se plasma en acciones orientadas a divulgar su tarea y cultivar una buena reputación.

Diez de las once PEA analizadas mantienen uno o más espacios virtuales (blogs, páginas de Internet o Facebook) donde informan sobre sus objetivos y actividades. Incluyen, además, enlaces a las páginas de otras PEA de Salamanca, indicio de la existencia de una red de personas que dinamizan la escena alternativa local: el 49,6% de los encuestados señaló participar en otra de las modalidades de PEA contempladas

en esta investigación. Estas páginas también permiten a terceras personas comunicarse con la PEA mediante una dirección de correo electrónico, alojada en un servidor comercial o gestionada por comunidades digitales sin ánimo de lucro (autistici.org, riseup.net). También se han documentado acciones de difusión convencionales, como la distribución de folletos en las actividades ordinarias o la apertura de estas a toda persona interesada, sobre todo en los CSA y las ferias de la MS. El cuidado diseño de la cartelería de las sedes transmite una imagen creativa y original.

Con todo, esta divulgación parece enfocada hacia las personas involucradas en esa escena local, que conformarían una *comunidad alternativa extendida*. En las entrevistas se reconoce cierta discreción en la organización de actividades con repercusión pública que pudieran atraer la atención de las autoridades municipales, dado el carácter alegal y no lucrativo de los ejemplos estudiados (salvo los MPT). Además de los argumentos domésticos y de la crítica a los procesos industriales, los principios cívicos internos comprometen la proyección pública de las PEA, en detrimento de su capacidad para captar recursos indispensables.

La justificación del mercado

La relación con el mercado, espacio de la competencia y la rentabilidad, concentra las tensiones derivadas de la inserción de las PEA en una sociedad capitalista. Los participantes no están preocupados por el éxito personal ni la riqueza material (tabla 2, afirmaciones 2 y 3). Desaprueban la competencia como patrón de conducta social y la empresa privada como protagonista de la economía (tabla 2, afirmaciones 7 y 8). Solo el 11,75% admite participar en una PEA para beneficiarse de precios baratos (tabla 3, respuesta 1), así que el ahorro de dinero o la cobertura de necesidades materiales no representan ventajas significativas (tabla 4, respuestas 1 y 2).

En consonancia con estos planteamientos de una economía para las personas, las PEA que manejan una divisa propia (MS y BT) establecen límites a los saldos deudores o acreedores de los participantes. Pretenden que la moneda no se acapare, sino que circule en un flujo continuo de intercambios que sostenga la iniciativa y alimente el espíritu de comunidad. La moneda recupera su función como medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor, pero se la despoja del atributo neoliberal de instrumento especulativo.

También se admite el beneficio ajeno en las transacciones con los productores (GCA, MPT), pero la fijación de precios no resulta de una negociación entre las partes. Las asambleas aceptan los precios que piden los productores porque, apelando al argumento doméstico, asumen que se trata de una cantidad justa que, a los costes objetivos, añade una ganancia digna, pero incompatible con el lucro. De hecho, algunos productores no fueron admitidos en los GCA por su afán de aumentar las ventas o por reclamar precios que las asambleas rechazaron por excesivos.

Ahora bien, este mercado eco-cívico-doméstico no es replicable en determinadas facetas críticas para la supervivencia de las PEA. Estas deben ser rentables, en el sentido de generar un flujo de ingresos en moneda legal que excede la cantidad imprescindible para financiar su función principal. Dichos ingresos proceden de cuotas periódicas abonadas por los socios o de actividades organizadas al efecto y que, en ocasiones, se anuncian en la esfera pública para atraer asistentes y fondos adicionales. Estas opciones implican una transferencia directa de renta personal desde los miembros a la iniciativa, congruente con su compromiso con la comunidad, pero al mismo tiempo significan una aceptación tácita del beneficio que reclaman los actores económicos externos.

En caso de disponer de un local alquilado, tales aportaciones voluntarias resultan crónicamente insuficientes para sufragar los gastos fijos. La observación de campo y de los espacios digitales detecta soluciones mercantiles para rentabilizar la sede, como su alquiler para actividades formativas alternativas, o el espacio público donde desarrollan su actividad, caso del patrocinio de puestos en los MPT. La reticencia ideológica a la relación salarial tampoco es óbice para el abono de pequeñas cantidades a las personas que cargan con tareas de gestión, financiadas con una tasa adicional sobre el importe del pedido semanal (GCA).

La justificación de la inspiración

Este contexto, tan condicionado por argumentos de naturaleza colectiva, alberga ciertos resquicios para la libertad individual, correspondiente con el orden de la inspiración y reclamada por los participantes. Mejorar la autoestima personal es una ventaja bien valorada (tabla 4, respuesta 3) y los motivos que expresan el deseo de disfrutar del propio tiempo (tabla 3, respuestas 2, 3 y 7) son secundarios frente a las de índole socioeconómica, pero no irrelevantes.

Las PEA constituyen un espacio autónomo y autogestionado. El rechazo a la dominación entre personas, más el derecho de todo participante a que se discutan sus propuestas en las asambleas, aseguran un entorno estable donde cubrir esas aspiraciones de autorrealización y transformación. Así lo reconocen los implicados cuando, preguntados por su satisfacción con el funcionamiento de la PEA, otorgan una valoración media de 4,0 puntos sobre 5, con un máximo de 4,2 (CSA) y un mínimo de 3,8 (HU).

No obstante, la institución del consenso como principio de toma de decisiones levanta una barrera estructural a la traducción de ideas nuevas en medidas concretas relativas al funcionamiento de la PEA o a su relación con el entorno. Varios de los casos estudiados se desgajaron de otras PEA por

diferencias sobre la orientación que estas iban adquiriendo. La búsqueda de la unanimidad puede representar un obstáculo para reajustar la jerarquía de órdenes de justificación ante retos como los altibajos del número de participantes, la introducción de otros métodos de gestión, la ampliación de la variedad de productos/servicios canalizados o el cumplimiento de requisitos administrativos. El rechazo del liderazgo y la jerarquía transfiere el poder al grupo a riesgo de desaprovechar, hasta cierto punto, el poder transformador que puedan albergar determinadas personas y propuestas.

Una compleja jerarquía alternativa de órdenes de justificación

Las justificaciones doméstica, ecológica y cívica conforman el núcleo argumentativo de las PEA, pero no garantizan por sí solas su viabilidad. Deben recurrir a los órdenes más próximos al capitalismo (mercantil, industrial y público) para subsanar las complicaciones que emergen cuando los esquemas alternativos topan con sus límites internos o con la presión externa. Como postula la teoría, estas contradicciones se legitiman mediante compromisos elaborados con argumentos tomados de los órdenes preponderantes.

El crucial orden doméstico no basta como principio rector: superado un tamaño mínimo elemental, se requieren reglamentos internos para conciliar la autogestión asamblearia con la fijación de unas contribuciones individuales imprescindibles, a la vista de la dispar aportación voluntaria de algunos miembros. La *ciudadanía alternativa* que dibujan estas reglas no exime del cumplimiento de obligaciones cívicas exógenas que impiden la autonomía total de la PEA y que se satisfacen gracias a soluciones de compromiso diseñadas para minimizar el impacto de la heteronomía sobre sus fundamentos antiautoritarios. El tamaño exige una gestión estandarizada que entraña ciertas

ta despersonalización, combatida con el argumento doméstico de la limitación del número de miembros.

Las convicciones ecológicas arman el segundo pilar de las PEA, pero las restricciones industriales (oferta estrecha) y comerciales (precios altos) al abastecimiento sostenible se soslayan apelando, de nuevo, a argumentos domésticos, ahora de confianza con el productor distante, pero tradicional, o con el tendero convencional, pero del barrio.

El orden del mercado tiene una presencia muy débil en las PEA, hecho congruente con su concepción cooperativa y opuesta a la competencia y al lucro. El excedente elemental que requiere todo circuito de valor se legitima, otra vez, mediante argumentos domésticos, como la comunidad de objetivos con los suministradores. Cuando está en juego la supervivencia de la PEA, puede abrirse la puerta a conductas comerciales, muy infrecuentes de todos modos. Una acción decidida en el ámbito público podría solventar estas carencias; pero ganar miembros cuestiona la base comunitaria y complica la continuidad de los proyectos por falta de recursos y por el riesgo de atraer la atención de las autoridades. El orden doméstico se impone así al público y al cívico-externo para alumbrar un compromiso que preserva la reputación ante la comunidad alternativa extendida que integran las PEA de una misma ciudad, a costa de pasar casi desapercibidas ante el resto de la sociedad y perder impacto transformador. Algo similar sucede en el terreno de la inspiración: las PEA son innovadoras como propuestas económicas y crean un contexto propicio a la realización personal, pero cada individuo debe aceptar los límites que el consenso impone a las iniciativas particulares.

Este entramado de compromisos hacia dentro y hacia afuera del proyecto alternativo demuestra, con Diprose (2017: 842), que «no existe un espacio externo totalmente ajeno al capitalismo», al menos todavía. Así

parecían pensar los participantes cuando se les solicitó que seleccionaran la afirmación más ajustada a sus aspiraciones. El 49,6% optó por «Intento corregir los aspectos más injustos del capitalismo actual», frente al 25,6% que prefirió «Rechazo totalmente el capitalismo como sistema económico y social» y el 24,8% que suscribió «Trabajo por construir unas relaciones económicas que me permitan vivir al margen del capitalismo». La preeminencia de lo comunitario, social y ecológico sobre lo estrictamente económico y la adopción inevitable de conductas comunes con la empresa convencional explicarían esta actitud moderada y reformista.

CONCLUSIONES

Este trabajo ha demostrado que las PEA conjugan argumentos relativos a todos los órdenes de justificación, igual que las empresas capitalistas y las organizaciones públicas no lucrativas. El marco teórico es capaz, pues, de conectar la actividad económica con el contexto social en distintos niveles de complejidad: corporaciones privadas, organismos públicos, circuitos de valor y, ahora, prácticas alternativas localizadas.

El proyecto alternativo elabora una jerarquía propia de órdenes de justificación. Consiste en una economía de las personas y no de las organizaciones (*prácticas*), autogestionada por la comunidad (orden doméstico) de manera autónoma (orden cívico-interno) y sostenible (orden ecológico). Se distancia de la firma capitalista por sus fines transformadores y sus principios de participación, equidad y sostenibilidad, pero se le aproxima cuando su funcionamiento interno y su inserción externa requieren estandarizar procedimientos, asegurar cierto excedente monetario y afianzar su reputación. Los argumentos domésticos y ecológicos se traducen en relaciones de proximidad alternativas a los circuitos globales que alejan a productores y consumi-

dores, en la línea marcada por las redes alimentarias alternativas.

El análisis de las PEA desde la teoría de los órdenes de justificación supera la visión binaria que opone *capitalismo* y *alternativa* como categorías excluyentes. Dibuja un panorama gradualista donde caben múltiples modalidades de coordinación económica que se diferencian por su combinación concreta de órdenes de justificación. Esta lectura gradualista, no dicotómica, tiene implicaciones sustanciales en el terreno de la potencialidad transformadora de las PEA. Hasta ahora, autores escépticos, como Lee (2010), consideran su pequeño tamaño como causa de su escaso impacto. Sin embargo, la decidida apuesta de algunos gobiernos municipales, en España y otras ciudades europeas, por estas prácticas alternativas puede abrir nuevas oportunidades al *movimiento de transición* (Transition Network [en línea]). Las medidas públicas de apoyo a huertos urbanos, bancos de tiempo o centros autogestionados no necesitan vestirse de argumentos habitualmente tildados de anticapitalistas o antisistema, sino que pueden apelar a los órdenes doméstico, ecológico y cívico como prioridades políticas y ciudadanas, sin eliminar las facetas industrial y mercantil, más próximas a la lógica capitalista, pero necesarias para dotar de consistencia a las propuestas alternativas. Esta evolución desde la ecocomunidad (Barbeta, 2014) hacia la alianza con el poder, incluso con el más cercano a la ciudadanía, generará un debate tan inevitable como vivo en el seno de estas comunidades autónomas y antiautoritarias, debate que la investigación académica debe abordar en próximas aportaciones.

BIBLIOGRAFÍA

- Alonso, Luis Enrique (2009). *Prácticas económicas y economía de las prácticas. Crítica del posmodernismo liberal*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Alonso, Luis Enrique; Fernández, Carlos J. e Ibáñez, Rafael (2014). «Crisis y nuevos patrones de consumo: discursos sociales acerca del consumo ecológico en el ámbito de las grandes ciudades españolas». *EMPIRIA - Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, 29: 13-38.
- Argüelles, Lucía; Angelovski, Isabelle y Dinnie, Elizabeth (2017). «Power and Privilege in Alternative Civic Practices: Examining Imaginaries of Change and Embedded Rationalities in Community Economies». *Geoforum*, 86: 30-41.
- Banet-Weiser, Sarah y Castells, Manuel (2017). «La economía es cultura». En: Castells, M. et al. *Otra economía es posible. Cultura y economía en tiempos de crisis*. Madrid: Alianza.
- Barbeta, Marc (2014). «De los vínculos en el consumo al consumo en los vínculos: análisis de las formas de sociabilidad en las prácticas de consumo ecológico». *Revista Española de Sociología*, 22: 67-95.
- Boltanski, Luc y Thévenot, Laurent (1991). *De la justification. Les économies de la grandeur*. Paris: Gallimard.
- Castells, Manuel et al. (2017). *Otra economía es posible. Cultura y economía en tiempos de crisis*. Madrid: Alianza.
- Chatterton, Paul (2016). «Building Transitions to Post-Capitalist Urban Commons». *Transactions of the Institute of British Geographers*, 41: 403-415.
- Cloutier, Charlotte y Langley, Ann (2013). «The Logic of Institutional Logics: Insights from French Pragmatist Sociology». *Journal of Management Inquiry*, 22: 360-380.
- Conill, Juana et al. (2012). *Otra vida es posible. Prácticas económicas alternativas durante la crisis*. Barcelona: Ediciones UOC.
- De Angelis, Massimo (2010). «The Production of Commons and the “Explosion” of the Middle Class». *Antipode*, 42: 954-977.
- Diprose, Gragon (2017). «Radical Equality, Care and Labour in a Community Economy». *Gender, Place and Culture*, 24: 834-850.
- Espinosa Seguí, Ana; Mackiewicz, Barbara y Rosol, Marit (2017). «From Leisure to Necessity: Urban Allotments in Alicante Province, Spain, in Times of Crisis». *ACME. An International E-Journal for Critical Geographies*, 16: 276-304.
- Fernández, Anna y Miró, Iván (2016). *L'economia social y solidària a Barcelona*. Barcelona: La

- ciutat invisible-Comissionat d'Economia Cooperativa, Social y Solidaria-Ayuntamiento de Barcelona.
- Hall, Peter y Soskice, David (eds.) (2001). *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford: Oxford University Press.
- Hughes, Neil (2015). «The Community Currency Scene in Spain». *International Journal of Community Currency Research*, 19: 1-11.
- Jagd, Søren (2011). «Pragmatic Sociology and Competing Orders of Worth in Organizations». *European Journal of Social Theory*, 14: 343-359.
- Jonas, Andrew E. G. (2010). «“Alternative” this, “Alternative” that: Interrogating Alterity and Diversity». En: Fuller, D.; Jonas, A. E. G. y Lee, R. (eds.). *Interrogating Alterity. Alternative Economic and Political Spaces*. Farnham: Asghate.
- Kallis, Giorgios (2017). «Economía sin crecimiento». En: Castells, M. et al. *Otra economía es posible. Cultura y economía en tiempos de crisis*. Madrid: Alianza Editorial.
- Lafaye, Claudette y Thévenot, Laurent (1993). «Une justification écologique? Conflits dans l'aménagement de la nature». *Revue Française de Sociologie*, 34: 495-524.
- Latouche, Serge (2013). «La décroissance comme projet urbain et paysager». *Etudes de Lettres*, 1-2: 1-11.
- Lee, Roger (2010). «Spiders, Bees or Architects? Imagination and The Radical Immanence of Alternatives/Diversity for Political-Economic Geographies». En: Fuller, D.; Jonas, A. E. G. y Lee, R. (eds.). *Interrogating Alterity. Alternative Economic and Political Spaces*. Farnham: Asghate.
- López Medina, José M.ª et al. (2014). «Transiciones socioecológicas en ámbitos urbanos metropolitanos: (re)construyendo barrios a escala humana». *Revista de Economía Crítica*, 17: 136-154.
- Mason, Paul (2016). *Postcapitalismo. Hacia un nuevo futuro*. Madrid: Paidós.
- Méndez, Ricardo y Monteserín, Obdulia (2017). «Redes alimentarias alternativas en grandes ciudades. Los mercados de productores agrarios en Madrid». *Cuadernos Geográficos*, 56: 193-216.
- Michelini, Juan José; Méndez, Ricardo y Abad, Luis Daniel (2017). «Movilización social y alternativas alimentarias en áreas urbanas: los grupos de consumo agroecológico en Madrid». *Ciudad y Territorio - Estudios Territoriales*, 194: 679-698.
- Moragues, Ana (2017). «Emancipatory or Neoliberal Food Politics? Exploring the “Politics of Collectivity” of Buying Groups in the Search for Egalitarian Food Democracies». *Antipode*, 49: 455-476.
- Nicolosi, Emily y Feola, Giuseppe (2016). «Transition in Place: Dynamics, Possibilities, and Constraints». *Geoforum*, 76: 153-163.
- Noterman, Elsa (2016). «Beyond Tragedy: Differential Commoning in a Manufactured Housing Cooperative». *Antipode*, 48: 433-452.
- Pascual, Henar; Gil, Esther y Guerra, Juan Carlos (2018). «Práctica social, economía alternativa y espacios de proximidad en la ciudad de Valladolid». *Recerca. Revista de Pensamiento y Análisis*, 23: 193-218.
- Polanyi, Karl [1944] (2003). *La gran transformación*. México: Siglo XXI.
- Ponte, Stefano (2016). «Convention Theory in the Anglophone Agro-Food Literature: Past, Present, and Future». *Journal of Rural Studies*, 44: 12-23.
- Salom, Julia; Pitarch, M.ª Dolores y Sales, Ana (2017). «Innovación social: estrategias urbanas en un contexto de cambio. El caso de la ciudad de Valencia». *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 91: 31-58.
- Suriñach, Roberto (2017). *Economías transformadoras de Barcelona*. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona.
- Valenzuela, Hugo y Molina, José Luis (2013). «La emergencia de las “empresas de base humana” en España: ¿nuevo paradigma o consecuencia inevitable?». *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 59: 523-542.
- Valor, Carmen y Papaoikonomou, Eleni (2016). «Time Banking in Spain. Exploring their Structure, Management and User's profile». *Revista International de Sociología*, 74: 1-14.
- Whatmore, Sarah y Thorne, Lorraine (1997). «Nourishing Networks: Alternative Geographies of Food». En: Goodman, D. y Watts, M. J. (eds.). *Globalising Food. Agrarian Questions and Global Restructuring*. London: Routledge.
- Yates, Luke (2015). «Everyday Politics, Social Practices and Movement Networks: Daily Life in Barcelona's Social Centres». *The British Journal of Sociology*, 66: 236-258.

Páginas de internet

Community Exchange System <<https://www.community-exchange.org/home/cen-statistics/>> [Acceso el 09.12.2017]

Mapa de Innovación Social de Cataluña <<https://barrisicrisi.wordpress.com/category/mapa-innovacio-social/>> [Acceso el 5.02.2018]

Mares de Madrid <<https://maresmadrid.es/>> [Acceso el 25.01.2018]

Plan Estratégico de la Economía Social y Solidaria de la Ciudad de Madrid <http://comess.reasmadrid.org/wp-content/uploads/2017/03/mesa2_ponencia_Resumen_ejecutivo.pdf> [Acceso el 23.01.2018]

Transition Network <<https://transitionnetwork.org/>> [Acceso el 6.03.2018]

RECEPCIÓN: 13/03/2018

REVISIÓN: 29/11/2018

APROBACIÓN: 13/02/2019

Orders of Worth as an Analytical Framework for Understanding Alternative Economic Practices

Los órdenes de justificación como marco analítico para el estudio de las prácticas económicas alternativas

José Luis Sánchez-Hernández and Lourdes Moro-Gutiérrez

Key words

- Capitalism
- Community
- Orders of worth
- Alternative economic practices
- Sustainability

Abstract

This article draws upon the theory of orders of worth to study those alternative economic practices that bring into question capitalism. Data from a survey administered to people engaged in 55 alternative experiences located in six Spanish towns are discussed, along with an in-depth analysis of eleven cases from the city of Salamanca, where semi-structured interviews, field observation and the regular monitoring of virtual spaces were used. These alternative initiatives build egalitarian, self-managed and autonomous communities, strongly focused on a respect for nature. However, they are compelled to incorporate market and business practices in order to ensure their internal operation and satisfy the demands from the legal environment. These corporate-like procedures are thus legitimised through compromises with domestic and ecological arguments.

Palabras clave

- Capitalismo
- Comunidad
- Órdenes de justificación
- Prácticas económicas alternativas
- Sostenibilidad

Resumen

Este artículo emplea la teoría de los órdenes de justificación para estudiar las prácticas económicas alternativas que cuestionan el capitalismo. Los datos proceden de un cuestionario aplicado a participantes en 55 experiencias de seis ciudades españolas, y del análisis de once casos en Salamanca mediante entrevistas semiestructuradas, observación directa y seguimiento de sus espacios virtuales. Estas iniciativas alternativas construyen comunidades igualitarias, autogestionadas, autónomas y respetuosas con la naturaleza. Sin embargo, para garantizar su funcionamiento interno y satisfacer las exigencias del entorno normativo, deben introducir métodos industriales y comerciales de índole empresarial que son legitimados a través de compromisos con los argumentos domésticos y ecológicos.

Citation

Sánchez-Hernández, José Luis and Moro-Gutiérrez, Lourdes (2019). "Orders of Worth as an Analytical Framework for Understanding Alternative Economic Practices". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 167: 107-124. (<http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.167.107>)

José Luis Sánchez-Hernández: Universidad de Salamanca | jlsh@usal.es

Lourdes Moro-Gutiérrez: Universidad de Salamanca | moro@usal.es

INTRODUCTION¹

During the financial and social crisis of the past decade, a series of economic initiatives have become widespread in advanced countries that have been labelled as *alternative economic practices* (Conill *et al.*, 2012). These practices challenge the conventional capitalist model that is based on: private ownership of the means of production; the company as an organisational unit; salaried employment as a source of income; market competition as a space for interaction; and the pursuit of individual profit as the objective of the economic process.

The Community Exchange System [online], the main global electronic platform for the management of social currencies and time banks, has recorded 201 social currency initiatives, and 43 time banks initiatives in Spain, which represent 28.3% and 22.9 % of the total worldwide. The Social Innovation Map of Catalonia [online] (*Mapa de Innovación Social de Cataluña*) has mapped 550 experiences (time banks, social currencies, consumer groups, urban allotments, self-managed spaces, energy cooperatives), while Employment, Economy and Strategic Planning Area of the Barcelona City Council, which supports these initiatives, has identified 250 examples (Fernández and Miró, 2016). The Strategic Plan for the Social and Solidarity Economy of the City of Madrid [online] (*Plan Estratégico de la Economía Social y Solidaria de la Ciudad de Madrid*) mentions 90 cases, within a broad spectrum of cooperatives and third sector organisa-

tions. The Mares de Madrid [online] municipal project, which is co-funded by the European Union, pursues urban, social and environmental transformation through alternative mobility, food, recycling, energy and care systems.

The literature on these economic experiences has two distinctive features, one theoretical and the other methodological. Firstly, these alternatives have been studied from perspectives that are critical of capitalism. The research supported by the labour theory of value (Jonas, 2010; Lee, 2010; Mason, 2016; Banet-Weiser and Castells, 2017) places collaborative and self-managed alternatives as forms of value distribution in contrast to the capitalist wage-labour relationship. The literature on communal goods (de Angelis, 2010; Noterman, 2016) argues for the collective management of essential resources and equipment (water, land, food, housing, public space) to combat neoliberal privatisation. There is a third trend that highlights the contribution of these practices, especially those linked to food (Alonso *et al.*, 2014; Barbeta, 2014), to the construction of a sustainable socioeconomic model. Degrowth (Latouche, 2013; Kallis, 2017) and transition niche (López *et al.*, 2014; Nicolosi and Feola, 2016) theories denounce the depredation of nature at the hands of capitalism and see these practices as evidence of the feasibility of less carbon-intensive economic solutions.

Secondly, there has been a predominance of local case studies that analyse a specific initiative, or several examples of the same type located in a specific city: producer markets in Madrid (Méndez and Monteserín, 2017); agroecological consumption groups in Madrid (Michelini *et al.*, 2017), Barcelona (Barbeta, 2014) and Valencia (Morganiques, 2017); self-managed spaces in Barcelona (Yates, 2015), and urban allotments in Alicante (Espinosa *et al.*, 2017). There have been fewer attempts to characterise a given practice for the whole of Spain, such

¹ This paper is part of the “Alternative economic spaces and practices for the construction of resilience in Spanish cities” (2016-2018) research project, Spanish R & D & I Programme - CHALLENGES (MINECO-FEDER- reference CSO2015-65452-R). This project is part of the Network of Excellence “RETURBAN - Challenges for 21st century cities: a research agenda for the construction of sustainable and innovative urban spaces” (2017-2019). Spanish Plan for the Promotion of Scientific and Technical Research of Excellence, reference CSO2016-81718-REDT.

as consumer groups (Alonso *et al.*, 2014), social currencies (Hughes, 2015), or time banks (Valor and Papaikonomou, 2016). The overviews provided on alternative economy in a city have been limited to Barcelona (Conill *et al.*, 2012; Fernández and Miró, 2016; Suriñach, 2017), Valencia (Salom *et al.*, 2017) and Valladolid (Pascual *et al.*, 2018). As far as research techniques are concerned, the use of semi-structured interviews predominates, followed a long way behind by group discussions and participant observation periods. The use of questionnaires is in the minority, and they are administered to participants who can report on a specific experience, except in the case of Conill *et al.* (2012).

This article proposes a different theoretical and empirical approach. Instead of analysing the *alternative nature* of these from positions divergent from capitalism, following Polanyi (1944) it is assumed that all economic processes are of a social nature and are subject to the same set of rationalities as other social activities. The theory of the *regimes of justification* or *orders of worth* developed by Boltanski and Thévenot in *De la Justification* (1991)², also known as *convention theory*, confirms the plurality of arguments used to evaluate the behaviours of people and organisations, and judge the congruence of the situations where they interact. It does not engage in a negative assessment of capitalism and, in fact, it has been used to demonstrate that the capitalist companies seek profitability through technical efficiency and market competition; but that their daily practices also incorporate actions that strengthen trust between their employees, their brands' reputation, their commitment to the community, and their contribution to sustainability.

The application of a theoretical framework common to the study of mechanisms of economic organisation that claim to be antagonistic (capitalist companies and their alternatives) will identify not only the points of divergence, the dominant approach so far, but also the points of confluence, still little considered (Argüelles *et al.*, 2017). This article uses the orders of worth theory to characterise the specific combination of rationalities that distinguishes alternative economic practices (AEPs) from capitalist companies. Both appeal to a series of arguments –orders of worth— that are potentially useful for all kinds of actors and situations. The *alternative* nature of AEPs would thus lie in constructing a hierarchy of orders of worth, different from the one applied by the capitalist model, but developed on the basis of the same arguments. Therefore, it is more complex than ritual references to cooperation, participation and sustainability (Barbeta, 2014; Moragues, 2017).

On an empirical level, this study goes beyond the scope of local approaches (focused on all the AEPs in a city) and sectoral approaches (focused on a given AEP in several cities). It is not centred on local dynamics or on specific variants (food, exchange ...), but on the arguments and solutions that the AEPs as a whole use to oppose capitalist organisational schemes. Six types of AEP have been analysed in six Spanish cities, which add up to 55 cases, in which techniques have been used thus far applied separately.

The first section presents the theory of orders of worth. The second proposes a definition of AEPs. The third describes the methodology and argues that these practices prioritise domestic, ecological and civic orders of worth, without completely ignoring the industrial, commercial, public and inspiration orders that guide capitalist praxis. The conclusions summarise the most important aspects in the study, and propose new lines of work.

² There is no Spanish translation of this book, but there is an English translation, albeit published long after the original: *On Justification. Economies of Worth*. Princeton: Princeton University Press, 2006.

THE THEORY OF ORDERS OF WORTH OR REGIMES OF JUSTIFICATION

The theory of orders of worth maintains that people resort to various types of arguments to judge the appropriateness of their own behaviour, of others' behaviour and of daily life situations. According to this pragmatic sociology, our need to give meaning to the actions that comprise our interpersonal relationships has given rise to the interactive construction of frames of reference called *orders of worth* or *regimes of justification*. These are coherent subsets of values, norms, conventions, acts and objects by which individuals construct, in an iterative process, reliable expectations about what is expected of them and what they can expect from others in the situations in which they participate on a daily basis. They provide criteria for evaluating the people's merits and to qualify situations and the quality of the objects that constitute them. They act as reducers of uncertainty, legitimise each individual's behaviour and are used as a basis to assess other people's behaviour.

The seminal text distinguished six orders of worth: inspired, industrial, market, domestic, opinion (or fame, or public), and civic; Lafaye and Thévenot (1993) later added the ecological order. In the inspired order, subjects do not invoke an earthly (i.e., social) order to justify their actions, but legitimises those actions as inspired by supernatural, unique forces, to which the subject feels responsible. In the industrial order, dominated by technical objects and scientific methods, people are judged by their professional qualifications, and their actions must contribute to the efficient functioning of production systems, from which stable performance is expected. In the market regime, the accumulation of wealth is the benchmark, and competition to accumulate it becomes fully acceptable behaviour to satisfy the individual's desire for profit. In the domestic order, respect for inter-personal bonds is demand-

ed in a context of physical proximity where the individual can only be conceived of as belonging to a network of people who are worthy of the group's trust. On the contrary, in the public regime, legitimate actions provide recognition to the individual outside of their inner circle, in the field of fame, and approval by a large number of strangers. The civic order judges people and actions according to their contribution to the common good and to the development of a (material or institutional) public space that guarantees the free participation of citizens. Finally, there is an appeal to the ecological order when the impact of individual or collective actions on nature is censured, or when contribution to environmental sustainability is praised.

Boltanski and Thévenot used the example of business organisations to demonstrate that their life is not subject to a single order of worth. All companies need to reconcile their central imperatives: they must be inspired (or innovative, in current terms), effective, profitable, cohesive, prestigious, committed and sustainable. Managing such diverse—or even opposed—demands is a source of internal and external conflicts that are resolved by reaching unstable agreements or compromises between divergent orders of worth. *De la Justification* devoted many pages to listing the criticisms that each order directs at other orders, and the agreements that can be reached through the negotiated articulation of arguments from various orders.

A full account of this discussion cannot be given here for reasons of space, but its importance for the study of social economy will be discussed. The circuits of value (which consist of producers, distributors, consumers and regulators) operate as cognitive frames of social interaction, where the attributes that the products must contain are negotiated. The evaluation of their quality no longer depends only on their traits, whether industrial (duration, reliability) or commercial (price, utility). Other criteria are increasingly

coming into play, including domestic (tradition, local origin), public (brand, logo), civic (respect for regulations, commitment to the community) and ecological (recycling, animal welfare) types of criteria. Companies convey a discourse to consumers that incorporates all of these components, although each one adapts it to the individual characteristics of its product and its niche market.

This theory has supported an extensive line of research on how this type of pluralism is managed. Corporations must reach compromises that combine elements of the different orders of worth; but they must also communicate such compromises to society in order to comply with the applicable regulations and with the expectations of increasingly segmented and demanding consumers (Alonso, 2009). Cloutier and Langley (2013) conducted a literature review that analysed these compromises in companies engaged in the production of nuclear power, the care of the elderly, cheese manufacturing, legal advice, and the evaluation of tourist services. The organisational changes these companies undergo in order to adapt their product and image to market trends were interpreted as a process in which domestic and ecological arguments were adopted. Jagd (2011) reviewed other contributions that applied these ideas to public organisations (hospitals, universities, schools) and found that, while their mission was imbued with civic purposes, their internal structure did not escape the demands of the industrial, market and public orders.

The theory of the orders of worth has been used to interpret the transformations of the agrifood system that have occurred in developed countries (Ponte, 2016, for a review) to analyse the circuits of value as a social space for negotiating the quality of products. This is due to the fact that food is one of the human needs that is most strongly modelled by natural and cultural factors. This literature stems from a critique of the food produced by global corporations and distrib-

uted by supermarket chains. It argues that these industrial food, market and fame regimes are responsible for the deterioration of traditional handicrafts, local trade, human health and the natural environment. The answer provided relies on a justification of the high quality of the food produced using domestic, civic and ecological arguments, embodied in *alternative food networks* (Whatmore and Thorne, 1997), based on the geographical proximity between producers and consumers, the equitable distribution of value, and sustainable circuits.

This article furthers this line of research by applying this theory to economic organisation mechanisms which are not formalised to the same degree as corporations, or that lack the complexity of value chains, but which share the domestic, civic and ecological objectives of alternative food networks.

PROPOSAL FOR A DEFINITION OF ALTERNATIVE ECONOMIC PRACTICES

The reviewed literature lists up to sixty *alternative* forms of economic organisation. However, it does not provide a definition that facilitates its empirical identification. This section addresses this task based on the three terms included in the concept of *alternative economic practices*.

The term *practices* designates organisational forms with a very low level of institutionalisation, very often lacking legal personality. At the most, their members are associations that meet basic requirements such as having rented a meeting place or entered into a contract for electricity supply. Its governing body is an assembly, open to all members, where decisions are made by consensus, not by majority.

These practices are *economic* because they produce, distribute or consume goods or services, or finance these functions. Like capitalism, their purpose is to satisfy human

needs. However, AEPs provide cooperative (non-competitive) solutions not only to cover market-based needs, but also other needs that are confined to the domestic sphere and, from the capitalist perspective, are not part of the economy, because they are met without any business transactions. The alternative economy prioritises use value (reuse, repair, barter, gift) over exchange value (price, credit), and aims to serve people as a whole, rather than becoming an end that must be fed through the permanent growth of production.

The notion of *alternative* is relational: it is alternative with respect to something that is considered conventional or mainstream, in this case, capitalism, particularly its current neoliberal, global and financialised version. It is important to identify three critical attitudes towards capitalism: opposition (anti-capitalism), transformation (neo-capitalism) and the desire to overcome it (post-capitalism).

Anti-capitalism actively opposes capitalism because it is nourished by Marxist, anarchist, feminist and environmentalist critiques, which see capitalism as an exploitative, oppressive, exclusionary and predatory system. Transformative trends, without questioning private property and the allocation of resources through the market, propose organisational schemes capable of correcting the most pernicious effects of capitalism on society and nature. Post-capitalism questions *capitalocentrism*, a worldview that dominates our way of thinking about the economy, according to which capitalism is seen as being the only viable economic system in the contemporary world. This movement recalls that, in daily life, many needs can be satisfied thanks to non-competitive or non-business practices that must be disseminated to stop the social penetration of capitalist relations.

This discussion should also incorporate a geographical dimension. The concept of *varieties of capitalism* (Anglo-American, Asian, continental European; Hall and Sos-

kice eds., 2001) is a reminder that capitalism is not a monolithic system, which operates independently of the specifics of the societies and cultures where it is rooted. This distinction cannot be avoided when attempting to define alterntativity: if capitalism adopts geographically differentiated configurations, its alternatives may differ according to the institutional context. This is the case with cooperative companies. In the US they are associated with the radical left (Noterman, 2016), but they lack this connotation in Mediterranean Europe, for example in the agricultural sector.

Alternative economic practices can be defined, then, as: *mechanisms of economic coordination that are governed by principles of autonomy, reciprocity and direct democracy; promote non-competitive values (sustainability, cooperation, equity); and seek to eliminate, transform or overcome the hegemonic variety of capitalism in its geographical field of action*. There are two spatial organisation models: either operating in a local area (neighbourhood, city), with physical meeting spaces for participants; or forming regional, national or international networks without the need for face-to-face contact between members.

This study focuses on the first of these and leaves out experiences such as fair trade and ethical banking, for two main reasons. First, because the will to build democratic and sustainable communities translates into the formation of small groups that seek physical proximity to stimulate confidence and minimise displacement (Conill et al., 2012; Moragues, 2017; Suriñach, 2017). Second, because their ideal of a values economy makes them the ideal object of study for a holistic theory. This theory is interested in the material situations created in the meeting spaces where, under weakly formalised conditions, compromises between orders of worth that demand the congruent functioning of each initiative are negotiated.

THE PLURALITY OF ORDERS OF WORTH IN ALTERNATIVE ECONOMIC PRACTICES

Methodology

This study was carried out in six Spanish cities, using a coordinated methodology. An inventory of AEPs that do not require the joint presence of participants which were operating in each city was drawn up, according to the categories proposed by Conill *et al.* (2012). This was done on the basis of the knowledge that each local research team had of their city, and of some additional online searches. The six most frequent and widely disseminated forms of AEPs were selected as the object of study, in order to collect data from each one, from different cities and towns, thus reducing the effect of the local context on the overall results.

Afterwards, a methodological handbook was prepared for each type of AEP, which included a definition of the criteria to be met by each individual case, a data collection form, a semi-structured interview script, and a standardised questionnaire. The last three tools consisted of questions that were common to the six classes of AEPs and of other questions that were specific to each of them. The fieldwork involved administering interviews to the people designated by the participants in each AEP. During the interviews, the data sheet was completed (establishment date, number of people involved, activities they organised and their frequency...). This was followed by a request that the questionnaire would be distributed among the participants, with the option of responding either on a paper form or online.

Between May and December 2017, data were collected from 55 experiences: four time banks (TBs), eight self-managed social centres (SMSCs), twenty-one agro-ecological consumption groups (AECGs), thirteen urban allotments (UAs), seven farmers' markets or barter markets (FBMs) and two social

currency initiatives (SCIs). All phases of the economic cycle (production, distribution, consumption and financing) were represented, plus a leisure and meeting space (SMSC). The cases were distributed among Valladolid (24), Salamanca (11), Zaragoza (6), León (5), Alicante (5) and Oviedo (4).

Out of a total of 4,202 people involved in these AEPs, 389 questionnaires were obtained. The results are statistically significant at a confidence level of 95% and a margin of error of 5% (with a minimum required sample size of 349 responses). The sample was composed of 53% women, the average age was 48.1 years old, and 92.5% had Spanish nationality. Their educational level (Table 1) was high (61.9% had university or post-university studies), consistent with a high proportion of them being active in the employment market (66.7% of participants were in employment), and belonging to households with a medium or medium-high income level: 43.7% reported that they earned between 20,000 and 40,000 euros per year (the Spanish average in 2016 was 26,730 euros, according to the Spanish Statistics Institute, *INE*).

The results from these questionnaires helped to situate the content of the eleven semi-structured interviews with the six types of AEPs in Salamanca in a wider context. These interviews were recorded with the consent of the participants. Their duration ranged from 40 to 70 minutes, and verbatim transcriptions of the interviews were used to encode the sections referring to the seven orders of worth using *N-Vivo* software. The remaining 44 interviews, also transcribed, were not used for three reasons. First, saturation level was reached with these eleven interviews, given the cross-cutting perspective of this study, as was observed after reading the other transcripts. Second, because the authors had the opportunity to observe or participate in different activities in these eleven AEPs during the fieldwork. In this way, a wealth of contextual information

TABLE 1. Profile of participants in 55 alternative economic practices in Spain

Level of education attained (n = 378)	%	Employment status (n = 378)	%	Annual household income (€) (n = 343)	%
Primary school	14.0	Retired	15.9	< 10,000	1.5
Baccalaureate	11.6	Student	11.6	10,000-20,000	30.9
Vocational training	12.4	Unemployed	5.8	20,000-40,000	43.7
University (diploma or degree)	45.2	In employment	66.7	40,000-60,000	7.6
Master's degree or doctorate	16.7			> 60,000	2.3

Source: Based on the survey data.

was provided that was not available for the other cases. This participation was always subject to the prior authorisation of the AEP assemblies when it was about members' activities, such as the distribution of orders or the assemblies themselves. The authors attended the open activities (fairs, markets, round tables) as members of the public, collected information leaflets and took photographs and field notes which were duly transcribed in a journal. Third, because all this information had been completed with the bi-weekly observation of the virtual spaces of these eleven AEPs, which hosted abundant data about their trajectory, objectives and activities. The material gathered by using face-to-face or virtual methods was essential in enriching the content of the eleven interviews, and to situate the alternative action in concrete physical and social spaces. It was also important in terms of verifying the meaning of the material situations in the development of compromises between orders of worth, as underlined by the theoretical framework.

Results

Essentially, the industrial and the market orders of worth, complemented by the public and inspiration-innovation orders of worth, support the functioning of contemporary capitalist companies. This does not prevent the recognition of how corporate social re-

sponsibility policies are widespread. They are imbued with civic and ecological values and human resource management techniques, aimed at strengthening interpersonal ties among the workforce (domestic order of worth). However, this is intended to increase their productivity and their commitment to the firm (Valenzuela and Molina, 2013).

The AEPs assert themselves as being alternative to this archetype. The data show that they also were in line with the seven orders of worth. They also have an economic purpose and share social and spatial spheres with capitalist firms. The difference lies, then, in the different combination of dominant orders of worth in each model.

The domestic order of worth

The small average size of the AEPs (76.4 members for the 55 cases, 37.7 in Salamanca) was found to be a basic requirement in forging a community of equals, based on interpersonal trust and direct participation in decision-making, one of the key claims made by the participants (Table 2, statement 11). The assembly (which was held either on a monthly or a weekly basis), to which all the members were invited to supervise the initiative's progress, facilitated regular contact and the exercise of a consensus-based democracy. Voting was never used to resolve discrepancies: problems were discussed in order to achieve unanimity and avoid feelings of exclusion among attendants.

TABLE 2. Attitudes of participants in 55 alternative economic practices in Spain

Statements	Average scores
For me it is important to...	
1 help other people and be generous	4.0
2 obtain personal success and have my achievements recognised by others	2.2
3 earn a lot of money and own many things	1.5
4 have autonomy to develop my own ideas	3.8
5 comply with the rules established in each situation	2.8
6 look after my health and my diet	4.0
In my opinion...	
7 the organisation of the economy should be based on private companies	1.7
8 competition among people is good because it stimulates effort and innovation	2.3
9 you can trust most people, not just friends and family	3.4
10 economic growth and job creation are more important than protecting the environment	1.7
11 it is necessary to develop more participatory forms of democracy	4.4

Source: Based on the survey data.

Note: Answers to the question "Rate your degree of agreement with the following statements by allocating a score of 1 to 5 (marking them with an 'X'), where 1 means 'Totally disagree' and 5 means 'Strongly agree'".

These assemblies were held at the AEPs' premises. The alternative space was an integral part of the community and was decorated with motifs related to its activity. Several respondents admitted that its small size limited the growth of the group or the improvement of its way of working. However, seeking new members was not mentioned as a priority, to the extent that the AEPs established a maximum number of participants, above which a new group was created.

This sense of community was reinforced by organising complementary activities (communal meals, barter markets, training workshops), and visits to AEP producers to de-commodify their relationship and establish personal ties.

However, the contribution of members to self-management was often subject to internal debate. Participants argued that it is important to help other people and that they are

worthy of trust (Table 2, statements 1 and 9). But they also admitted to a certain division between a few very committed participants and others who carried out the minimum number of compulsory tasks, which hindered the group's smooth running.

The civic order of worth

The domestic link built on the assembly and headquarters supported a civic space or *alternative citizenship*, subject to compliance with some unanimously approved rules. The main, most structured initiatives (TBs, AEC-Gs, SCIs) had written regulations which were accessible on their websites and defined the members as "partners" or "members", with a number of rights and duties in connection with the collective space. Anti-authoritarian movements such as the SMSCs rejected this form of coercion, but displayed some rules of behaviour either on their website or display

at their premises lists of appropriate and inappropriate types of behaviours. This alternative civic space encouraged an autonomous existence with respect to conventional socio-economic models, a highly valued aspiration among those involved (Table 2, statements 4 and 5).

The UAs, FBMs and SMSCs were functionally linked to their physical headquarters (plot, square, premises) and included the will to transform social relations in their immediate environment either by conducting their main task (UAs, FBMs), or through the counterculture proposals hosted by SMSCs, whose premises tended to be used for gatherings of ecologist, feminist and anti-capitalist groups. The TBs, which were interested in recovering mutual aid neighbourhood networks, wanted to de-commodify proximity relations by implementing a system of exchange of services between equals. The AECGs showed their commitment to maintaining the rural population by purchasing food from producers who are independent from large supermarkets.

The answers to the questionnaire corroborated this transformative purpose. The most cited reason for participating in AEPs was to improve society, followed by a criti-

cism of conventional economy (Table 3, answers 4 and 5). The personal advantages that their involvement brought included constructing an economic alternative (second place) and improving the local conditions of life (third place) (Table 4, answers 5 and 7). The interest in transforming the neighbourhood where the AEP was located took secondary. These findings are consistent with the definition of AEPs as an instrument for moving towards a different society.

This internal and external aspect of the alternative civic order of worth did not involve compliance with other civic obligations imposed by the State and capitalism, such as paying rent and maintaining the premises. The most complex initiatives (TBs, SCIs, FBMs) were found to be law-abiding organisations that had signed the contracts as legally required. Other AEPs used premises provided by unions or parish churches, and compensated them for the expenses using cash from their activity. Another option was for one individual to enter into contracts (in their name) and make monthly payments using funds generated by the AEP or made up of equal contributions by participants (SMSCs, UAs). When the alternative civic spaces were faced with standards common

TABLE 3. Reasons for participating in 55 alternative economic practices in Spain

REASONS (number of mentions)		Nº	%
1	I can access free or cheaper goods and services	124	11.75
2	It allows me to participate in different activities	111	10.52
3	I can interact with different people	151	14.31
4	I contribute to improving society	259	24.55
5	I challenge mainstream economy	224	21.23
6	I help to transform my neighbourhood	91	8.63
7	I like to spend my time engaging in this activity	95	9.00
Total		1,055	100.00

Source: Based on the survey data.

Note: Answers to the question "Why do you participate in this activity? Choose a maximum of THREE reasons".

TABLE 4. Assessment of the advantages associated with participating in alternative economic practices

Advantages		Average scores
1	I save money	2.6
2	I cover my material needs	2.8
3	I improve my personal self-esteem	3.1
4	I feel more integrated into the neighbourhood	2.8
5	I improve the living conditions in my environment	3.9
6	I fight social exclusion in my environment	3.1
7	I contribute to create an alternative to the dominant economic system	4.1
8	I protect the environment	4.2

Source: Based on the survey data.

Note: Answers to the question "How important are the following advantages for you in participating in this activity? Rate the following with a score of 1 to 5, where 1 is 'Not important' and 5 is 'Very important' (mark the numbers with an 'X')".

to all citizens, compromises had to be reached to reconcile being aligned with their original ideology and fulfilling some inescapable requirements.

The ecological order of worth

The construction of a socio-economic model that respects nature was a core objective of AEPs: protecting the environment was considered more important than economic growth and job creation (Table 2, statement 10), and the main advantage associated with participating in an AEP was protecting the environment (4.2 points, Table 4).

Those involved in UAs, AECGs or FBM s wanted to consume local foods obtained by natural means that excluded animal suffering and chemical treatments. They valued health care through food as highly as collaboration with others (4.0 points, Table 2, statement 6). However, they questioned official environmentally friendly accreditations because the cost of certification and periodic visits to check standards was too high for small producers. The foods sold in the FBM s usually lacked these certificates and their local and artisanal sourcing was emphasised. The UAs analysed worked as spaces for the socialisa-

tion and transmission of traditional knowledge between elderly people of rural origin and urban young people eager to consume vegetables without chemical additives. These arguments combine the ecological and the domestic orders of worth in order to challenge the capitalist strategies that commodity the criticism of industrialised foods. The SMSCs are antispecist spaces, host vegan canteens to raise funds, and they put on repair and recycling workshops for bicycles, clothes and furniture.

However, the ecodomestic ideal of a comprehensive supply of natural and local foods supplied by small farmers also suffers from restrictions. The AECs in Salamanca reported that they acquire food from provinces such as Valencia, Murcia, Granada, Cáceres, Burgos and Palencia, because the local supply is insufficient and the natural conditions prevent the local production of citrus, rice and fish. The SMSCs interviewed recognised that they lack the funds to buy organic food and replace it with fruits and vegetables bought in local stores, a commitment that substitutes the ecological order of worth for the domestic one.

The industrial order of worth

The AEPs in the study sought to be efficient. The periodicity of their assemblies established a more or less obligatory compliance routine. There was a standard procedure to process the orders of the AECGs, which were always collected on the same day and time from the premises. The process was supervised by a rotating group of volunteers that centralised the orders and transmitted them to the producers. The SCs distributed a monthly electronic bulletin of offers of goods or services for payment in ecos. The SMSCs posted a weekly schedule of opening hours and activities in their blog. The UAs designed their crop distribution, periodicity of irrigation and treatment of the plants. The FBMs specifically allocated tasks related to the layout of the stalls and the provision of the operating infrastructure to the organising committee.

Again, larger initiatives required standardised management procedures: TBs and SCIs relied on digital platforms that connected bidders and claimants together, allowed them to agree on the terms of the exchange, recorded the transactions made and calculated the balance of each user. The BTs had a system of cheques that users were required to deliver to the secretary, managed by an association that supervised the quality of the exchanges by means of a telephone call to the receiver.

However, the disinclination of participants to the dehumanisation inherent to industrial methods hindered their implementation: establishing a maximum number of members that guaranteed mutual trust was the most widespread safeguard mechanism. The respondents reported the existence of debates such as one on the possibility of replacing names by numbers in the baskets of an AECG; while it was recognised that this would expedite the distribution of orders, it implied a loss of personal recognition that was not accepted by the assembly.

The public order of worth

AEPs do not seek to isolate themselves from the rest of society, despite the primacy of domestic arguments. Their desire for social and environmental change is reflected in actions aimed at spreading their work and cultivating a good reputation.

Ten of the eleven AEPs analysed hosted one or more virtual spaces (blogs, webpages and/or Facebook) where they provide information about their objectives and activities. They also include links to the webpages of other AEPs in Salamanca, which indicate that there is a network of people who promote a dynamic local alternative scene: 49.6% of respondents indicated that they participated in another form of AEP of those included in this study. These webpages also allowed third parties to communicate with the AEPs through an email address, hosted on a commercial server or managed by non-for-profit digital communities (autistici.org, riseup.net). Conventional dissemination actions were also documented, such as distributing brochures about their regular activities and inviting people who might be interested in their activities, especially in SMSCs and in CSI fairs. The impeccably designed posters featured in their premises conveyed a creative and original image.

However, the dissemination of their activities seemed to be focused on the people involved in the local scene, which made up an *extended alternative community*. In the interviews some discretion was identified in the organisation of public activities that could attract the attention of local government authorities, given the unregulated and non-profit nature of the initiatives studied (except for the FBMs). In addition to domestic arguments and criticism of industrial processes, internal civic principles compromise the public penetration of AEPs, to the detriment of their ability to obtain essential resources.

The market order of worth

The relationship with the market, the space for competition and profitability, is the focus of the tensions derived from AEPs being immersed in a capitalist society. The participants were not concerned about personal success or material wealth (Table 2, statements 2 and 3). They disapproved of competition as a pattern of social behaviour and of private companies as dominating the economy (Table 2, statements 7 and 8). Only 11.75% admitted participating in an AEP to benefit from cheap prices (Table 3, answer 1), so saving money and covering material needs did not represent significant advantages (Table 4, answers 1 and 2).

In line with these approaches based on a people's economy, the AEPs in the study that had their own currency (SCIs and TBs) established limits to the participants' debit or credit balances. The purpose was preventing currency from being hoarded, and ensuring that it circulates in a continuous flow of exchanges that sustains initiative and nourishes community spirit. In this way, currency recovers its function as a method of payment, a unit of account and a deposit of value, but it is stripped of the neoliberal attribute of being a speculative instrument.

Other people's profit was also allowed in the transactions with producers (AECGs, FBMs), but prices were not established as a result of a negotiation between the parties. The assemblies accepted the prices set by producers because, appealing to the domestic argument, they assumed that it was a fair amount that enabled them to obtain decent earnings, considering the objective costs, but was incompatible with profit. In fact, some producers were not admitted to the AECGs because of their desire to increase sales or to demand prices that the assemblies rejected as excessive.

However, this eco-civic-domestic market cannot be replicated in certain critical aspects for the survival of AEPs. AEPs must be

profitable, in the sense of generating a flow of revenues in legal currency that exceeds the amount necessary to finance their main purpose. These revenues come from regular fees paid by members or from activities organised for that purpose which are occasionally advertised to the public to attract attendees and additional funds. These options involve a direct transfer of personal income from the members to the initiative, consistent with their commitment to the community, but at the same time they mean a tacit acceptance of the profit demanded by external economic actors.

With rented premises, such voluntary contributions are chronically insufficient to cover the fixed expenses. Field observation and an analysis of the digital spaces revealed that business solutions were used to make the premises profitable, such as renting them out for alternative training activities, or the public space where they carry out their activity, in case of the sponsorship of stalls by the FBMs. The ideological reluctance to a salary relationship does not prevent small payments being made to people who are in charge of management tasks, funded by applying an additional fee on to the amount of the weekly order (AECGs).

The inspired order of worth

Even though this environment is highly conditioned by collective arguments, it provides some leeway for individual freedom required by participants, in line with the inspiration order. Improving personal self-esteem was found to be a highly valued advantage (Table 4, answer 3), and reasons that expressed a wish to enjoy one's time (Table 3, answers 2, 3 and 7) were secondary to those of a socio-economic nature, but not irrelevant.

AEPs are autonomous, self-managed spaces. The rejection of domination between people, plus the right of all participants to have their proposals discussed in the assemblies, ensure a stable environment to allow for aspirations of self-realisation and transforma-

tion. This was recognised by those involved when, asked about their level of satisfaction with how the AEP worked, they gave an average rating of 4.0 points out of 5, with a maximum of 4.2 (SMSCs) and a minimum of 3.8 (UAs).

However, the establishment of consensus as a decision-making principle causes a structural barrier to the translation of new ideas into concrete measures related to the operation of AEPs or their relationship with their environment. Several of the cases studied were separated from other AEPs due to discrepancies in the direction they were taking. The search for unanimity may represent an obstacle to readjusting the hierarchy of orders of worth in the face of challenges such as: the ups and downs in the number of participants, the introduction of other management methods, the extension of the variety of products/services offered, and compliance with administrative requirements. The rejection of leadership and hierarchy transfers power to the group, but to a certain extent, these practices may risk wasting the transforming power that certain people and proposals can bring.

A complex alternative hierarchy of the orders of worth

Domestic, ecological and civic orders of worth form the argumentative core of AEPs, but do not guarantee their viability by themselves. They must resort to the orders closest to capitalism (market, industrial and public) to overcome the difficulties that arise when alternative schemes meet their internal limits or external pressure. As the theory posits, these contradictions are legitimised through compromises that rely on arguments taken from the prevailing orders of worth.

The crucial domestic order on its own is not enough as a guiding principle. Beyond an elementary minimum size, internal regulations are required to reconcile assembly self-management, with the setting of essential

individual contributions, in view of the very different levels of activity provided by some members. The *alternative citizenship* defined by these rules does not excuse the fulfilment of exogenous civic obligations that impede the total autonomy of AEPs; these obligations are fulfilled thanks to compromise solutions designed to minimise the impact of heteronomy on their anti-authoritarian foundations. Size demands standardised management, which involves a certain degree of depersonalisation, often addressed by resorting to the domestic argument of limiting the number of members allowed.

Ecological convictions form the second pillar of AEPs. The restrictions, both industrial (narrow offer) and commercial (high prices), to accessing sustainable supply are avoided by appealing to domestic arguments. These are related to trusting distant —but traditional— producers, and conventional —but local— shopkeepers.

The market order of worth has a very weak presence in AEPs, which is consistent with its cooperative basis, opposed to competition and profit. The elementary surplus that all circuits of value require is legitimised, again, by domestic arguments, such as having shared objectives with suppliers. Business-like behaviour may be introduced when the survival of an AEP is threatened, but this is very infrequent. A determined action in the public sphere could solve these shortcomings. But attracting members brings the community base into question and complicates the continuity of projects, due to a lack of resources and the risk of attracting the attention of the authorities. The domestic order of worth thus prevails over both the public and the civic-external ones in order to give rise to a compromise to preserve an AEP's reputation within the extended alternative community in the same city; and yet, this may be at the cost of passing almost unnoticed by the rest of the society and losing their transformative impact. Something similar happens in the field of inspiration: AEPs

are innovative as economic proposals and create a context conducive to personal fulfilment, but each person must accept the limits that consensus imposes on individual initiatives.

This framework of compromises within and outside of the alternative project shows, in line with Diprose (2017: 842), that "there is no pure outside to capitalism", at least yet. This is what the participants seemed to think when they were asked to select the statement that best suited their aspirations. Some 49.6% opted for "I try to correct the most unfair aspects of current capitalism", compared to 25.6% who preferred "I totally reject capitalism as an economic and social system" and 24.8% who subscribed to "I work to build a type of economic relationship that allows me to live outside of capitalism". The pre-eminence of community, social and ecological aspects over strictly economic considerations, and the adoption of behaviour that is inevitably alike to that featured by conventional businesses could explain this moderate and reformist attitude.

CONCLUSIONS

This study has shown that AEPs combine arguments related to all orders of worth, as do capitalist businesses and non-profit public organisations. The theoretical framework is therefore able to connect economic activity with social context at different levels of complexity: private corporations, public bodies, circuits of value and, now, localised alternative practices.

The alternative project constructs its own hierarchy of orders of worth. It consists of an economy of people and not of organisations (*practices*) that is self-managed by the community (domestic order) autonomously (civic-internal order) and sustainably (ecological order). These initiatives take distance from capitalist firms, given their transformative purposes and their principles of participa-

tion, equity and sustainability, but come closer to mainstream businesses when their internal functioning and their external insertion require standardised procedures, ensuring a certain monetary surplus and a strengthening of their reputation. The domestic and ecological arguments are translated into proximity relationships that are alternative to the global circuits that distance producers and consumers, along the lines marked out by alternative food networks.

Using the theory of orders of worth to analyse AEPs goes beyond the binary view that places *capitalism* and *alternative* into mutually exclusive categories. It paints a continuum-based picture, where multiple forms of economic coordination are differentiated by their specific combination of orders of worth. This, non-dichotomous, continuum-based interpretation has significant implications in terms of the transformative potential of AEPs. Until now, skeptical authors such as Lee (2010) considered their small size to be the cause of their low impact. However, the determination and commitment to these alternative practices by some local governments, both in Spain and in other European countries, can open new opportunities to the *transition movement* (online Transition Network). Public measures to support urban allotments, time banks and self-managed social centres do not need to take on arguments usually labelled as anti-capitalist or anti-system; they can appeal to the domestic, ecological and civic orders as political and civic priorities, without eliminating the industrial and market elements, which are closer to the capitalist logic, but necessary to provide consistency to alternative proposals. This evolution from the eco-community (Barbeta, 2014) towards an alliance with power, even with that closest to citizens, will generate a lively, inevitable debate within these autonomous and anti-authoritarian communities, a debate that academic research should address in future projects.

BIBLIOGRAPHY

- Alonso, Luis Enrique (2009). *Prácticas económicas y economía de las prácticas. Crítica del posmodernismo liberal*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Alonso, Luis Enrique; Fernández, Carlos J. and Ibáñez, Rafael (2014). "Crisis y nuevos patrones de consumo: discursos sociales acerca del consumo ecológico en el ámbito de las grandes ciudades españolas". *EMPIRIA - Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, 29: 13-38.
- Argüelles, Lucía; Angelovski, Isabelle and Dinnie, Elizabeth (2017). "Power and Privilege in Alternative Civic Practices: Examining Imaginaries of Change and Embedded Rationalities in Community Economies". *Geoforum*, 86: 30-41.
- Banet-Weiser, Sarah and Castells, Manuel (2017). "La economía es cultura". In: Castells, M. et al. *Otra economía es posible. Cultura y economía en tiempos de crisis*. Madrid: Alianza.
- Barbata, Marc (2014). "De los vínculos en el consumo al consumo en los vínculos: análisis de las formas de sociabilidad en las prácticas de consumo ecológico". *Revista Española de Sociología*, 22: 67-95.
- Boltanski, Luc and Thévenot, Laurent (1991). *De la justification. Les économies de la grandeur*. Paris: Gallimard.
- Castells, Manuel et al. (2017). *Otra economía es posible. Cultura y economía en tiempos de crisis*. Madrid: Alianza.
- Chatterton, Paul (2016). "Building Transitions to Post-Capitalist Urban Commons". *Transactions of the Institute of British Geographers*, 41: 403-415.
- Cloutier, Charlotte and Langley, Ann (2013). "The Logic of Institutional Logics: Insights from French Pragmatist Sociology". *Journal of Management Inquiry*, 22: 360-380.
- Conill, Juana et al. (2012). *Otra vida es posible. Prácticas económicas alternativas durante la crisis*. Barcelona: Ediciones UOC.
- De Angelis, Massimo (2010). "The Production of Commons and the 'Explosion' of the Middle Class". *Antipode*, 42: 954-977.
- Diprose, Gradon (2017). "Radical Equality, Care and Labour in a Community Economy". *Gender, Place and Culture*, 24: 834-850.
- Espinosa Seguí, Ana; Mackiewicz, Barbara and Rosol, Marit (2017). "From Leisure to Necessity: Urban Allotments in Alicante Province, Spain, in Times of Crisis". *ACME. An International E-Journal for Critical Geographies*, 16: 276-304.
- Fernández, Anna and Miró, Iván (2016). *L'economia social y solidària a Barcelona*. Barcelona: La ciutat invisible-Comissionat d'Economia Cooperativa, Social y Solidaria-Ayuntamiento de Barcelona.
- Hall, Peter and Soskice, David (eds.) (2001). *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford: Oxford University Press.
- Hughes, Neil (2015). "The Community Currency Scene in Spain". *International Journal of Community Currency Research*, 19: 1-11.
- Jagd, Søren (2011). "Pragmatic Sociology and Competing Orders of Worth in Organizations". *European Journal of Social Theory*, 14: 343-359.
- Jonas, Andrew E. G. (2010). "'Alternative' this, 'Alternative' that: Interrogating Alterity and Diversity". In: Fuller, D.; Jonas, A. E. G. and Lee, R. (eds.). *Interrogating Alterity. Alternative Economic and Political Spaces*. Farnham: Ashgate.
- Kallis, Giorgios (2017). "Economía sin crecimiento". In: Castells, M. et al. *Otra economía es posible. Cultura y economía en tiempos de crisis*. Madrid: Alianza Editorial.
- Lafaye, Claudette and Thévenot, Laurent (1993). "Une justification écologique? Conflicts dans l'aménagement de la nature". *Revue Française de Sociologie*, 34: 495-524.
- Latouche, Serge (2013). "La décroissance comme projet urbain et paysager". *Études de Lettres*, 1-2: 1-11.
- Lee, Roger (2010). "Spiders, Bees or Architects? Imagination and The Radical Immanence of Alternatives/Diversity for Political-Economic Geographies". In: Fuller, D.; Jonas, A. E. G. and Lee, R. (eds.). *Interrogating Alterity. Alternative Economic and Political Spaces*. Farnham: Ashgate.
- López Medina, José M. et al. (2014). "Transiciones socioecológicas en ámbitos urbanos metropolitanos: (re)construyendo barrios a escala humana". *Revista de Economía Crítica*, 17: 136-154.
- Mason, Paul (2016). *Postcapitalismo. Hacia un nuevo futuro*. Madrid: Paidós.
- Méndez, Ricardo and Monteserín, Obdulia (2017). "Redes alimentarias alternativas en grandes ciudades. Los mercados de productores agrarios en Madrid". *Cuadernos Geográficos*, 56: 193-216.

- Michelini, Juan José; Méndez, Ricardo and Abad, Luis Daniel (2017). "Movilización social y alternativas alimentarias en áreas urbanas: los grupos de consumo agroecológico en Madrid". *Ciudad y Territorio - Estudios Territoriales*, 194: 679-698.
- Moragues, Ana (2017). "Emancipatory or Neoliberal Food Politics? Exploring the 'Politics of Collectivity' of Buying Groups in the Search for Egalitarian Food Democracies". *Antipode*, 49: 455-476.
- Nicolosi, Emily and Feola, Giuseppe (2016). "Transition in Place: Dynamics, Possibilities, and Constraints". *Geoforum*, 76: 153-163.
- Noterman, Elsa (2016). "Beyond Tragedy: Differential Commoning in a Manufactured Housing Cooperative". *Antipode*, 48: 433-452.
- Pascual, Henar; Gil, Esther and Guerra, Juan Carlos (2018). "Práctica social, economía alternativa y espacios de proximidad en la ciudad de Valladolid". *Recerca. Revista de Pensament y Anàlisi*, 23: 193-218.
- Polanyi, Karl [1944] (2003). *La gran transformación*. México: Siglo XXI.
- Ponte, Stefano (2016). "Convention Theory in the Anglophone Agro-Food Literature: Past, Present, and Future". *Journal of Rural Studies*, 44: 12-23.
- Salom, Julia; Pitarch, M.ª Dolores and Sales, Ana (2017). "Innovación social: estrategias urbanas en un contexto de cambio. El caso de la ciudad de Valencia". *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 91: 31-58.
- Suriñach, Roberto (2017). *Economías transformadoras de Barcelona*. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona.
- Valenzuela, Hugo and Molina, José Luis (2013). "La emergencia de las 'empresas de base humana' en España: ¿nuevo paradigma o consecuencia inevitable?". *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 59: 523-542.
- Valor, Carmen and Papaoikonomou, Eleni (2016). "Time Banking in Spain. Exploring their Structure, Management and User's profile". *Revista Internacional de Sociología*, 74: 1-14.
- Whatmore, Sarah and Thorne, Lorraine (1997). "Nourishing Networks: Alternative Geographies of Food". In: Goodman, D. and Watts, M. J. (eds.), *Globalising Food. Agrarian Questions and Global Restructuring*. London: Routledge.
- Yates, Luke (2015). "Everyday Politics, Social Practices and Movement Networks: Daily Life in Barcelona's Social Centres". *The British Journal of Sociology*, 66: 236-258.

Webpages

- Community Exchange System <<https://www.community-exchange.org/home/cen-statistics/>> [Consulted on 09.12.2017]
- Mapa de Innovación Social de Cataluña <<https://barrisicrisi.wordpress.com/category/mapa-innovacio-social/>> [Consulted on 5.02.2018]
- Mares de Madrid <<https://maresmadrid.es/>> [Consulted on 25.01.2018]
- Plan Estratégico de la Economía Social y Solidaria de la Ciudad de Madrid <http://comess.reasmadrid.org/wp-content/uploads/2017/03/mesa2_ponencia_Resumen_ejecutivo.pdf> [Consulted on 23.01.2018]
- Transition Network <<https://transitionnetwork.org/>> [Consulted on 6.03.2018]

RECEPTION: March 13, 2018

REVIEW: November 29, 2018

ACCEPTANCE: February 13, 2019